

Colpensiones remite contestación - 11001310504620220040500 - SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA C.C. 51809549

notificaciones@taborabogados.com <notificaciones@taborabogados.com>

Vie 1/09/2023 3:40 PM

Para: Juzgado 24 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato24@cendoj.ramajudicial.gov.co>; estrategialitigacional2013@yahoo.es <estrategialitigacional2013@yahoo.es>

CC: vmejia@taborabogados.com <vmjia@taborabogados.com>; 'TABOR ABOGADOS COORDINACION' <taborcoordinacion@gmail.com>; gerencia@taborabogados.com <gerencia@taborabogados.com>; dtorres@taborabogados.com <dtorres@taborabogados.com>

📎 1 archivos adjuntos (3 MB)

11001310502420220040500 ContestaciónColpensiones.pdf;

Doctora:

NOHORA PATRICIA CALDERÓN ÁNGEL

JUZGADO VEINTICUATRO (24) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

E. S. D.

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 11001310504620220040500

DEMANDANTE: SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA C.C. 51809549

DEMANDADA: Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES.

ASUNTO: CONTESTACION A LA DEMANDA

Respetada Dra.

De la manera más atenta, y dentro de los términos procesales oportunos nos permitimos remitir la contestación dentro del proceso de la referencia, junto con el poder de sustitución, copia de la escritura pública relacionado dentro del acervo probatorio del cuerpo de la contestación de la demanda. Así mismo, me permito indicar que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 2213 de 2022, simultáneamente se efectuó envío de la contestación de la demanda con sus respectivas pruebas y anexos, a la dirección de correo electrónico indicada por la parte demandante en el libelo introductorio de demanda para efectos de notificaciones, esto es al correo electrónico del apoderado:

estrategialitigacional2013@yahoo.es

Solicitamos que a la vuelta de este correo nos acuse su recibo.

Respetuosamente,



Doctora:
NOHORA PATRICIA CALDERÓN ÁNGEL
JUZGADO VEINTICUATRO (24) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E. S. D.

REFERENCIA: Ordinario Laboral de Primera Instancia
DEMANDANTE: Sandra Patricia Santos Valderrama C.C. 51809549
DEMANDADO: Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES- Y AFP PROTECCION – AFP COLFONDOS
S.A.
RADICACIÓN: 11001310502420220040500

ASUNTO: PODER ESPECIAL

MARIA CAMILA RIOS OLIVEROS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.026.275.391 de Bogotá D.C., en mi calidad de representante legal de la firma **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S.**, bajo el NIT 900.442.223-7 sociedad con domicilio principal la ciudad de Bogotá constituida mediante Documento Privado del 1 de junio de 2011 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2011, con el No. 01485654 del Libro IX., actuando en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, para realizar las actuaciones necesarias para la defensa jurídica de esta Entidad dentro del proceso del asunto, mediante poder general otorgado mediante la Escritura Pública No. 1186 del 17 de mayo de 2023 de la Notaria segunda (02) del Circulo de Bogotá.

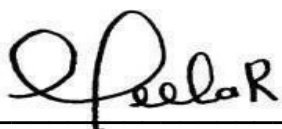
A su vez, manifiesto que a través del presente escrito **SUSTITUYO** poder al abogado **DIANA LEONOR TORRES ALDANA**, igualmente mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.069.733.703 expedida en Fusagasugá (Cund.) y portador de la Tarjeta Profesional No.235.865 del Honorable C.S.J., para que realice la defensa y continúe con el debido proceso para que ejerza la defensa jurídica en los intereses de Colpensiones.

En consecuencia, sírvase reconocer personería a la Doctora **DIANA LEONOR TORRES ALDANA**, en los términos del presente mandato.

Renuncio a término de notificación y ejecutoria del auto favorable.

De usted, respetuosamente,

Acepto;



MARIA CAMILA RIOS OLIVEROS
C.C. No. 1.026.275.391 de Bogotá
T.P. No. 272.749 del C. S. J.



DIANA LEONOR TORRES ALDANA
CC.No.1.069.733.703 de Fusagasugá
T.P.No.235.865 del C.S.de la J.

Doctora:
NOHORA PATRICIA CALDERÓN ÁNGEL
JUZGADO VEINTICUATRO (24) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E. S. D.

REFERENCIA: Ordinario Laboral de Primera Instancia
DEMANDANTE: Sandra Patricia Santos Valderrama C.C. 51809549
DEMANDADO: Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-
Y AFP PROTECCION Y AFP COLFONDOS S.A.
RADICACIÓN: 11001310502420220040500

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA

DIANA LEONOR TORRES ALDANA, abogada en ejercicio, debidamente identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderada judicial sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones - en adelante COLPENSIONES - cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo con la sustitución de poder otorgado por la doctora **MARIA CAMILA RIOS OLIVEROS**, en su calidad de apoderada principal de la entidad demandada, tal y como consta en el poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la parte demandante.

1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, **REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO**

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificatorio del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle. La representación legal la ejerce el doctor **JAIME DUSSAN CALDERÓN**.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la **Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100**.

2. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LOS **HECHOS DE LA DEMANDA**

De conformidad con lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., me permito pronunciarme respecto a los hechos de la siguiente manera, con el fin de que se fije el litigio en cada uno de ellos, atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad y a que los hechos que se tomen como ciertos no constituye prueba de confesión¹

AL HECHO 1: ES CIERTO que la señora SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA, quien se identifica con la C.C. No 51.809.549 nació el 27/09/64, conforme el documento de identidad que obra en el expediente administrativo de la demandante.

¹ C.G.P Artículo 195. Declaraciones de los representantes de personas jurídicas de derecho público. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.

AL HECHO 2: ES CIERTO que la demandante se afilió al Régimen de pensiones, en fecha 10/01/1990, al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES "I.S.S", hoy, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, "COLPENSIONES"; verificada la historia laboral emitida por mi representada.

AL HECHO 3: NO ME CONSTA que en el mes de marzo de 1996, la demandante se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad (RAIS) administrado por la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías "Horizonte S.A", (hoy Porvenir S.A), por conductas y promesas engañosas de asesores de la citada entidad; toda vez que si bien la demandante realizó un traslado de régimen, es un hecho ajeno a mi representada la forma, el momento en que se hizo efectivo y el Fondo de Pensiones al cual realizó el anterior, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora. En consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 4: NO ME CONSTA que con posterioridad, en fecha septiembre de 2000, la demandante se trasladó entre administradoras de Fondos pensiones y Cesantías, de la AFP, Horizonte, (hoy Porvenir S.A), a la AFP COLFONDOS S.A, por promesas engañosas de sus asesores; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 5: NO ME CONSTA que nuevamente, la demandante se traslada entre AFP, de COLFONDOS S.A, a la AFP PROTECCIÓN S.A, en fecha 23/10/2008, mediante promesas engañosas de sus asesores, entidad que actualmente le administra su afiliación al Régimen Individual con Solidaridad (RAIS); toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 6: NO ME CONSTA que los anteriores mencionados fondos privados de pensiones, NO LE BRINDARON a la demandante una orientación acerca de las condiciones y requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez, así como el eventual monto de la mesada, razón por la cual la decisión de vinculación a los fondos privados y continuidad en el RAIS, en absoluto estuvo precedida del deber de información y asesoría, que le hubiese permitido comprender los efectos nocivos que conllevaba el cambio de régimen pensional; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 7: NO ME CONSTA que es así que, en visita efectuada por asesores de la AFP HORIZONTE S.A (Hoy Porvenir S.A), COLFONDOS Y PROTECCIÓN S.A, le ofrecieron a la demandante, el beneficio de pensionarse a más temprana edad y le manifestaron que el Instituto de Seguros Sociales, iba a ser liquidado y que por ello sus aportes se encontrarían en riesgo; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 8: NO ME CONSTA que los asesores comerciales de las AFP, de HORIZONTE S.A (HOY PORVENIR), COLFONDOS Y PROTECCIÓN S.A, respectivamente, le ofrecieron a la demandante, unos beneficios para que accediera a ese traslado, tales como que, el monto de la pensión sería más alto al que le otorgaría el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 9: NO ME CONSTA que a la demandante, no se le manifestó al momento de la afiliación, el monto de capital requerido por la AFP Horizonte S. A (Hoy Porvenir S.A), para obtener una pensión en renta vitalicia y en retiro programado; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 10: NO ME CONSTA que a la demandante, no se le manifestó al momento de la afiliación, el monto de capital requerido por la AFP COLFONDOS S.A, para obtener una pensión en renta vitalicia y en retiro programado; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 11: NO ME CONSTA que a la demandante, no se le manifestó al momento de la afiliación, el monto de capital requerido por la AFP PROTECCIÓN S.A, para obtener una pensión en renta vitalicia y en retiro programado; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 12: NO ME CONSTA que a la señora SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA, NO se le indicó el monto del capital requerido en la AFP Horizonte S.A (Hoy Porvenir S.A) para que pudieran heredar sus beneficiarios en retiro programado; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 13: NO ME CONSTA que a la señora SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA, NO se le indicó el monto del capital requerido en la AFP COLFONDOS S.A, para que pudieran heredar sus beneficiarios en retiro programado; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 14: NO ME CONSTA que a la señora SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA, NO se le indicó el monto del capital requerido en la AFP PROTECCIÓN S.A, para que pudieran heredar sus beneficiarios en retiro programado; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el

artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 15: NO ME CONSTA que a la demandante, las demandadas, (HORIZONTE HOY PORVENIR S.A - COLFONDOS S.A Y PROTECCIÓN S.A) no le indicaron que, el plazo para retornar al Régimen Solidario de Prima Media Con Prestación Definida, administrado en ese entonces por el I.S.S (Hoy COLPENSIONES), vencía cuando ella cumpliera los 47 años de edad; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 16: NO ME CONSTA que en las visitas realizadas por cada uno de los asesores del RAIS, subordinados a cada una de las AFP demandadas, (HORIZONTE S.A HOY PORVENIR S.A - COLFONDOS S.A Y PROTECCIÓN S.A) le manifestaron a la señora SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA, que si ella al cumplir la edad no quería pensionarse, podría solicitar le devolvieran el capital que tuviera acumulados a dichas entidades sin restricción alguna; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 17: NO ME CONSTA que a la demandante, los respectivos asesores de las AFP DEMANDADAS, (HORIZONTE HOY PORVENIR S.A COLFONDOS S.A Y PROTECCIÓN S.A), NO LE ELABORARON al momento de cada una de sus asesorías sobre el traslado de régimen, la proyección de la pensión, mostrando la diferencia de la pensión que recibiría en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual por ellos representados; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 18: NO ME CONSTA que los formularios de cada uno de las demandadas (HORIZONTE S.A. hoy PORVENIR S.A. - COLFONDOS S.A Y PROTECCIÓN S.A), suscritos por la demandante, al momento de su vinculación con cada una de ellas, NO presentan la información suficiente, clara y concisa que le permita tomar la mejor decisión respecto a su perspectiva pensional.

AL HECHO 19: NO ME CONSTA que lo consignado en la "solicitud de vinculación o traslado" suscrito por la señora SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA, ante la AFP demandada PROTECCIÓN S.A, respecto de; "HAGO CONSTAR QUE LA SELECCIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD LO HE EFECTUADO EN FORMA LIBRE, ESPONTÁNEA Y SIN PRESIONES. MANIFIESTO QUE HE ELEGIDO A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A, PARA QUE ADMINISTRE MIS APORTES PENSIONALES Y QUE LOS DATOS PROORCIONADOS EN ESTA SOLICITUD SON VERDADEROS ", no pueden tenerse como que a la demandante se le brindó una información clara y suficiente respecto de las implicaciones que se darían por su traslado de régimen, máxime cuando no se presenta un consentimiento informado como sucede en el presente caso; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 20: NO ME CONSTA que en documento allegado por la demandada AFP PROTECCIÓN S.A. a la demandante, fechado el 06/07/2022, le acredita un total de capital acumulado en su cuenta individual, de NOVENTA Y CUATRO MILLONES, CERO VEINTISIETE MIL NOVECCIENTO CUARENTA Y OCHO (\$ 94.027.948.00) pesos; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 21: NO ME CONSTA que la pensión de la señora, SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA, cotizando al régimen de prima media con prestación definida administrada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, sería del 65% en renta vitalicia con una tasa de reemplazo del 90% del ingreso base de cotización, tomando como punto de referencia los últimos 10 años cotizados, lo que sin lugar a dudas, traería como resultado desde el punto de vista cuantitativo, una diferencia enorme, como quiera que en el fondo privado se toma como referencia solo el 35% del ingreso base de cotización; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada, ya que Colpensiones no estuvo ni ha estado presente en la vinculación al RAIS de la actora, tampoco ha sido su administradora de pensiones en los últimos años y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 22: NO ME CONSTA que el día 10/03/2022, la demandante presentó Reclamación Administrativa de la NULIDAD de la afiliación del traslado de Régimen a la AFP PROTECCIÓN S.A. entidad que administra el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con radicado PET-04405164; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 23: NO ME CONSTA que en respuesta del 29/03/22, ante reclamación administrativa de la demandante a la AFP PROTECCIÓN S.A, ésta LE CONFIESA que, al momento de la afiliación ante tal entidad, no le hicieron entrega de ningún documento, referente a la información, solicitada, pues solo basta, según la demandada, "la voluntad del afiliado"; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 24: NO ME CONSTA que de igual forma, la accionada AFP PROTECCIÓN S.A. le manifiesta a la demandante en la respuesta anteriormente descrita que, si quería algún tipo de información relacionada con su afiliación o del régimen del RAIS, para eso, ellos poseen "diferentes canales de servicio, como página web, oficinas de servicio al cliente, línea de servicios y asesoría personalizada."; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 25: NO ME CONSTA que así mismo, la accionada AFP PROTECCIÓN S.A, le manifestó a la demandante en dicha comunicación que; ellos" ... no están obligados a suministrar ningún tipo de registro escrito de proyecciones pensionales..."; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 26: NO ME CONSTA que ante la respuesta incompleta A LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA, por parte de la AFP PROTECCIÓN S.A., la demandante radicó un complemento a la anterior reclamación, con radicado del 22/04/22 No PET- 04688209; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 27: NO ME CONSTA que el día 21/04/2022, la demandante presentó Reclamación Administrativa de la NULIDAD de la afiliación del traslado de Régimen a la AFP COLFONDOS S.A., entidad que maneja el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 28: NO ME CONSTA que el día 21/04/2022, la demandante presentó Reclamación Administrativa de la NULIDAD de la afiliación del traslado de Régimen a la AFP PORVENIR S.A, entidad que maneja el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con radicado No 0190105030811000; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 29: NO ME CONSTA que la AFP PORVENIR, contestó a la demandante su reclamación administrativa en fecha 12/05/22 y le manifiesta que no era su obligación para el año 1996 (fecha de afiliación) la entrega de cálculos actuariales, matemáticos y/o proyecciones pensionales; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 30: NO ME CONSTA que así mismo, en dicha contestación PORVENIR S.A, le confiesa a la demandante que, no cuentan con los soportes solicitados en la reclamación administrativa, ya que el proceso de afiliación se realizó de manera verbal; toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y, en consecuencia, deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P., pues le compete a la parte que alega un supuesto fáctico probar el mismo.

AL HECHO 31: ES CIERTO que el día 15/03/2022, la demandante presentó Reclamación Administrativa de la NULIDAD de la afiliación del traslado de Régimen ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -"COLPENSIONES", con radicado NO 2022-3383741; conforme la documental que obra en el expediente administrativo de la actora.

AL HECHO 32: ES CIERTO que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -"COLPENSIONES, al responder la reclamación administrativa radicada, le contesta a la demandante en comunicado del 28/03/2022, con radicado B22022-3383741-0814924, que, la asesoría no era retroactiva y que, además, era solo obligatoria a partir del 01/10/2006; conforme la documental que obra en el expediente administrativo de la actora.

AL HECHO 33: ES CIERTO que de igual manera, La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES, le manifiesta a la demandante que ellos, solo anulan el traslado, cuando hay falsedad en el documento de afiliación y siempre y cuando sea declarada por la FGN y cuando le hubieran afiliado sin su consentimiento.

3. HECHOS FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda respecto de mi representada, las cuales carecen de fundamentos legales y en consecuencia solicito se absuelva a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** de todos y cada uno de los cargos que en su contra se formulan, por las siguientes razones:

El problema jurídico radica en establecer si ¿le asiste derecho a la señora **SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA** a que se declare la nulidad y/o ineficacia de traslado de régimen pensional efectuado ante el RAIS?

Sirven de fundamentos en derecho los siguientes fallos:

- Corte Suprema de Justicia- SL 1452 de 2019
- Corte Suprema de Justicia- SL 1688 de 2019
- Corte Suprema de Justicia- SL 39314 de 2008
- Corte Suprema de Justicia- SL 31989 de 2008
- Corte Constitucional- C 086 DE 2016
- Corte Constitucional- C 1024 DE 2004
- Corte Constitucional- C 1025 DE 2007
- Corte Constitucional- C 789 DE 2002
- Corte Constitucional- C 596 de 1997
- Corte Constitucional- SU 130 DE 2013
- Corte Constitucional- SU 062 DE 2010.

Sirven de Fundamentos Jurídicos, los siguientes:

3.1. IMPROCEDENCIA DE DECLARATORIA DE NULIDAD O INEFICACIA EN EL CASO PARTICULAR.

Es de señalar que el traslado de los aportes enunciados anteriormente se realizó con plena voluntad del cotizante y en consecuencia no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por la accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y condenar a mi representada a recibir los aportes para activar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, teniendo en cuenta que por decisión propia solicitó, suscribiendo los formularios para efectuarlo, **voluntad que se vio ratificada con los más de 27 años que ha realizado cotizaciones** al régimen de ahorro individual con solidaridad. Además, el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, establece la libre escogencia entre regímenes pensionales y también la posibilidad de trasladarse una vez cada cinco años contados a partir de la selección inicial, sin embargo, por razones financieras y de estabilidad en el sistema pensional el artículo 1 del Decreto 3800 de 2003, limitó este derecho cuando al afiliado le faltare 10 años o menos para alcanzar la edad a pensión, salvo los afiliados que tuviera 15 años cotizados a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones (1 de abril de 1994), para quienes se conservó el derecho a regresar al Régimen de Prima Media en cualquier momento, situación que la demandante no cumple para su retorno automático.

Ahora bien, sobre la constitucionalidad de las anteriores restricciones se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C- 062 de 2010, en dichos fallos manifestó:

"El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia en la norma acusada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del régimen solidario de prima media, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que por lo mismo no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarían en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste económico, pudiesen trasladarse de

régimen cuando estuviesen próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y por ende poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes”

Desde esta perspectiva dice la Corte Constitucional:

Que dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y semanas puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas, permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no solo al concepto constitucional de Equidad (C.P. art 95), sino también al principio de eficiencia pensional, el cual consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho el sistema de seguridad social.”

Así mismo, revisado el expediente administrativo de la demandante, no se observa solicitud alguna concerniente al traslado que hubiera podido solicitar ante COLPENSIONES, o alguna posible solicitud de la información sobre las diferencias entre un régimen y otro con anterioridad al año **2022**, atendiendo a que peticionaba que la afiliación fuera nula, situación que permitió establecer que para la data en la que elevó dicha solicitud ya estaba dentro de la prohibición de la que habla el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

3.2. IMPROCEDENCIA DE REQUERIR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA INEXISTENTE AL MOMENTO DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL REALIZADO POR LA PARTE ACTORA.

Respecto del deber de información que recae en cabeza de las administradoras de pensiones, es preciso recordar que las demandadas no desconocen su existencia desde el año 1993, con el expedición de la ley 100 de 1993 y el del decreto 663 de 1993, sin embargo es de resaltar que dicho deber se intensifica con la expedición de la ley 1328 de 2009, en donde el deber de información se convierte en un deber de asesoría y buen consejo, por lo que no es dable requerir las mismas formalidades en la asesoría previa al traslado desde el momento mismo de la creación del régimen de ahorro individual con solidaridad y darle el mismo alcance que el legislador y la jurisprudencia le han dado con el transcurso del tiempo.

No es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que el principio de legalidad y el debido proceso, no consisten solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga.

El juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes, no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de Colpensiones quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación.

3.3. DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LAS EXPECTATIVAS LEGITIMAS

Para el caso que nos ocupa debe indicar que según lo señala la sentencia C-596 de 1997

“cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho”.

De otra parte la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 130 de 2013 indicó que:

"más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas decisiones de tutela, que consideran la posibilidad de trasladado "en cualquier tiempo", del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con beneficio del régimen de transición para todos los beneficiarios de régimen, por edad y por tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos pronunciamientos y se reafirma en el alcance fijado en las sentencias de constitucionalidad, en el sentido de que solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a 1º de abril de 1994.

Lo anterior por cuanto, se reitera, las normas que consagran el régimen de transición, así como la pérdida del mismo, y la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales con sus correspondientes restricciones, fueron objeto de control constitucional por parte de esta corporación, a través de las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, analizadas con detalle en el acápite precedente, que definieron su verdadero sentido y alcance, considerándolas acordes con la Constitución, y al tratarse de decisiones con efectos de cosa juzgada, adquieren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre ellas no cabe discusión alguna".

Es claro que en este asunto no estamos frente a derechos adquiridos por lo que debe recordarse que las figuras señaladas tienen consecuencias jurídicas bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, ya estaba dentro de la prohibición de la que habla el artículo 2º de la Ley 797 de 2003

3.4.OBLIGACIONES CONTRACTUALES TAMBIÉN RECAEN EN CABEZA DEL AFILIADO COMO CONSUMIDOR FINANCIERO.

No debe desconocerse que el vínculo contractual generado a partir de la selección y afiliación a uno u otro régimen pensional, genera obligaciones reciprocas, tal y como lo establece el artículo 1495 del código civil, en los siguientes términos:

"ARTICULO 1495. DEFINICION DE CONTRATO O CONVENCION. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas."

De esta manera no se puede desconocer que el afiliado también tiene obligaciones para con la administradora de pensiones que elija, tal y como lo ha determinado el decreto 2241 de 2010, que en su artículo 4º enuncia los deberes de los consumidores financieros del Sistema General de Pensiones, dentro de los cuales se resalta:

"1. Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo Sistema de Administración de Multifondos y de las diferentes modalidades de pensión.

2. Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden.

3. Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos", según sea el caso."

Conforme a lo anterior, es evidente que el deber de información se integra, por una parte con la obligación de asesoría y buen consejo que deben suministrar las administradoras de pensiones a los posibles afiliados, pero también con la información que deben adquirir de manera autónoma los consumidores financieros, acerca de las condiciones, modalidades y sistemas que integran los regímenes pensionales, que permita tomar decisiones, con el

debido cuidado y atención que merece la decisión por ejemplo de afiliarse, trasladarse o escoger una modalidad particular, acorde a las expectativas pensionales de cada afiliado.

**3.5. ANÁLISIS DE CADA CASO EN PARTICULAR CON MIRAS A EVITAR
REGLAS GENERALES Y AUTOMÁTICAS QUE PERMITAN TRASLADO
DE RÉGIMEN PENSIONAL BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA –
ACLARACIÓN DE VOTO MAGISTRADO RIGOBERTO ECHEVERRY
BUENO, SENTENCIA CSJ SL 1452 DE 2019, RAD. 68852.**

En atención a los múltiples pronunciamientos que han realizado nuestras altas cortes, en los que se han fijado parámetros para el análisis de las pretensiones tendientes a la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, no se puede dejar de lado la particularidad de cada caso, que también ha sido objeto de análisis por parte de los órganos de cierre, en el presente asunto, nos encontramos frente a una persona capaz, consiente y con unas calidades académicas y profesionales particularmente altas, que permiten establecer que la decisión que tomó durante la afiliación al RAIS, estuvo precedida de la información necesaria para concluir que el traslado realizado era la opción más viable para sus intereses futuros, en ese entendido, no puede considerarse que factores como la fluctuación en el mercado de trabajo, evolución de los salarios de la parte actora y otras variables que representan mayor o menores réditos, sean razones suficientes para considerar que no se le suministró toda la información necesaria para predecir las consecuencias en su futuro pensional, así lo expuso el Magistrado Rigoberto Echeverry Bueno en la aclaración de voto que realiza en la Sentencia CSJ SL 1452 de 2019, cuando indica:

"(...) existen otros eventos en los que no es posible visualizar perjuicios inmediatamente derivados de la decisión del traslado, de manera que las presuntas falencias en la información no producen un efecto cierto o por lo menos determinable en ese momento. Ante tales supuestos, el afiliado debe someterse a las condiciones del sistema por el que optó y puede verse beneficiado o perjudicado, en función de factores como su fluctuación en el mercado de trabajo, la evolución de sus salarios y otras variables que bien le pueden acarrear mayores o menores réditos, respecto de las prestaciones que hubiera podido conseguir en otro régimen. Estos casos, en mi criterio, deben quedar abrigados por la decisión del trabajador y su apuesta por la construcción del derecho en determinado régimen, de manera que no pueden generar la ineficacia del traslado (...)"

Por otro lado, la conveniencia de pertenecer a un régimen o a otro, resulta clara para los casos que ha estudiado la Corte Constitucional, cuando una persona perdía la transición, o para quienes habían cumplido uno de los dos requisitos dispuestos en la ley para alcanzar la pensión en el régimen de prima media o incluso para quienes tenían una expectativa cercana de acceso a la prestación, y en dichas condiciones no se encuentra la demandante.

Por su parte el Decreto 692 de 1994 en su artículo 11 establece que la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte. (El subrayado es nuestro).

Señala la norma anterior, los requisitos de forma que debe contener el formulario que se debe diligenciar para adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora.

Y finalmente, establece que cuando el afiliado se traslade por primera vez del RPM al RAIS, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones y además autoriza la norma a que el formulario contenga leyenda impresa en este sentido.

Ahora bien, en el caso de que la falta de información se hubiera basado en que las **AFP PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A.** no realizaron una proyección pensional a la señora **SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA** al momento de su traslado, preciso resulta indicar al despacho, que las proyecciones pensionales no son pruebas útiles para demostrar un eventual vicio en el consentimiento al momento en que decidió su afiliación dentro de las opciones que la ley le daba. Sumado a ello, dicha obligación de emitir por parte de las AFP herramientas financieras o proyecciones pensionales a los potenciales afiliados nació con el Decreto 2071 de 2015, es decir, con posterioridad al traslado de la demandante.

Además, el mencionado Decreto en su artículo 2.6.10.4.3. Parágrafo 2 establece:

"Parágrafo 2º. La proyección de que trata este artículo, proporcionada por la Administradora del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, a través de las herramientas financieras, deberá entenderse como un cálculo estimado de la eventual futura pensión. La Administradora deberá informar al afiliado que la mesada pensional resultante es una mera proyección y no un derecho consolidado, por fundamentarse en una simulación de supuestos futuros probables, pero sin certeza sobre la ocurrencia." (El subrayado es nuestro.)

Ahora bien, como quiera que el monto pensional en el RAIS también depende de variables como el rendimiento financiero de los fondos sujetos al comportamiento fluctuante de la economía, incierto resulta establecer un posible monto que le permitiera en ese momento a el demandante evaluar cuál sería a futuro el régimen más favorable, en esa medida, no se puede afirmar que el supuesto silencio de los **fondos privados**, en estos puntuales aspectos constituya falta en el deber de información.

3.6. LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA NO PUEDE SER APLICADA EN FORMA GENÉRICA, SIN NINGUNA PONDERACIÓN Y EN DESIGUALDAD DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN UN PROCESO.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 167 de la ley 1564 de 2012, es evidente que quien afirma la ocurrencia de un hecho, es quien debe soportar probatoriamente la carga que ello genera, de tal forma que la regla general es que corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho que exhibe y atendiendo las situaciones particulares del caso, no obstante lo anterior, el juez puede invertir la carga de la prueba exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias.

La carga dinámica e inversión de la prueba al interior de un proceso judicial exige la igualdad entre las partes con parámetros de buena fe y lealtad procesal. Bajo estas circunstancias el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Para determinar quién es el que puede probar dentro de un proceso judicial la Corte Constitucional ha señalado que depende de cada situación particular. Así la sentencia C 086 de 2016 que analizó la constitucionalidad del art. 167 del Código General del Proceso, indicó:

7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

En la regulación aprobada por el Legislador este decidió también de manera deliberada y consciente no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejó abierta esa posibilidad al juez, "según las particularidades del caso", para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos,

(iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, "entre otras circunstancias similares".

Para el caso que nos ocupa, es preciso analizar las particularidades del caso, así:

Hasta el año 2016, los fondos privados cuentan exclusivamente con el consentimiento vertido en el formulario de afiliación, para probar el conocimiento y asentimiento del afiliado respecto del traslado, por cuanto las leyes que surgieron entre el año 1994 y 2016 no exigían nada diferente al documento de afiliación donde constaba la plena intención de pertenecer al Régimen de ahorro individual con solidaridad.

Imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

Igualmente, si bien existe una intervención de asesoría de la administradora de pensiones que podría generar un vicio en la voluntad del traslado, ello debe demostrarse pues de lo contrario predominarían las conjeturas y suposiciones, y no los hechos debidamente demostrados en el proceso en los que intervino directamente la demandante.

No pueden considerarse a todos los afiliados como una parte débil e indefensa, la misma ley previó distintos deberes en cabeza de los mismos con el fin de que por interés propio se asesoren de la mejor manera. Adicionalmente no pueden desconocerse las situaciones que rodean cada caso y que de alguna manera le permitían a la demandante obtener información mínima durante el paso del tiempo. La Corte Constitucional en sentencia T 122 de 2017 ha indicado, en este sentido y en diversas providencias que nadie puede alegar su propia culpa a favor:

"Una persona no es digna de ser oída ni menos pretender el reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reproachable. Para la Corte, nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma. Este principio no tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico. No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a su naturaleza de regla general del derecho, al derivarse de la aplicación de la analogía iuris. Por ello, cuando el juez aplica dicha regla, se ha señalado que el mismo no hace otra cosa que actuar con fundamento en la legislación."

Con lo señalado hasta ahora, debe considerarse que la carga dinámica de la prueba no puede invertirse de una forma arbitraria y sin considerar los aspectos particulares de cada caso debidamente individualizado, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la citada providencia C 086 de 2016:

"Imponer al juez la obligación de acudir en todos los eventos a la institución de la carga dinámica de la prueba, y no de manera ponderada de acuerdo con las particularidades de cada caso y los principios generales de la Ley 1564 de 2012, significaría alterar la lógica probatoria prevista en el estatuto procesal diseñado por el Legislador, para en su lugar prescindir de las cargas procesales razonables que pueden imponerse a las partes y trasladar esa tarea únicamente al juez"

De tal forma que evitar reglas automáticas que permitan el traslado de régimen pensional bajo cualquier condición y aprovechándose de la imposibilidad que tiene la parte demandada de probar un hecho que ni la legislación ni la jurisprudencia exigían configurar para el momento del traslado, resulta necesario y procedente en el presente asunto, dadas las particularidades del caso.

3.7. NO ES DABLE ALEGAR IGNORANCIA DE LA LEY, PARA JUSTIFICAR UNA DECISIÓN TOMADA HACE MÁS DE 20 AÑOS.

Por otra parte, observando que la demandante manifiesta que la falta de información también radica en que no se le explicaron las ventajas y desventajas del régimen de ahorro individual, debe precisarse que las características, condiciones y modalidades pensionales propias de este régimen están consignadas en los artículos 59 y siguientes de la ley 100 de 1993, norma que por ser de alcance nacional impone su conocimiento a todos los ciudadanos a partir de su promulgación en los términos del artículo 11 del Código Civil, por tanto no es dable alegar la ignorancia como excusa a voces de lo que prevé el artículo 9 de la Codificación antes citada, para atribuir a la AFP la responsabilidad de haber omitido información al respecto ya que este señalamiento lo hace la ley, máxime cuando la demandante de manera voluntaria suscribió el formulario de afiliación al RAIS.

De otro lado, si la señora juez concluyera que le asiste razón a la demandante y ordena el respectivo traslado entre regímenes, debe decirse que para el respectivo traslado de aportes se debe cumplir con lo normado en el artículo 113 de la Ley 100 de 1993, que establece:

"ARTÍCULO 113. TRASLADO DE RÉGIMEN. Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:

a) Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;

b) Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización"

En consecuencia, de lo antes expuesto, solicito muy respetuosamente al Despacho, desestimar estas pretensiones, absolviendo a mi representada de cada una de ellas.

Finalmente, no puede desconocerse el gran problema que puede generar el traslado indiscriminado de afiliados que excusándose en presuntas faltas al deber de información de las administradoras de pensiones, pretenden acceder a una prestación en el régimen de prima media con prestación, cuando no han guardado fidelidad al sistema; es importante tener en cuenta el principio de sostenibilidad financiera del sistema Pensional, del cual la CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-242 de 2009. Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, indicó:

"Las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios individuales y beneficios al sistema (artículo 48 CP, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005). Ello explica que esta Corte haya puesto de presente que el Legislador no está obligado a sostener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las Leyes vigentes, en un momento determinado. Su potestad de configuración legislativa le habilita a modificar los regímenes jurídicos en función de nuevas variables, razones de oportunidad o conveniencia, y a otros intereses y circunstancias contingentes que deba priorizar para lograr los fines del Estado Social de Derecho, desde luego, consultando parámetros de justicia y equidad, y con sujeción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad"

En igual sentido la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 del 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C-062 del año 2010; la Corte indicó:

"(...)el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste

periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...)

Desde esta perspectiva si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)

Aunado a lo anterior, es de recordar que el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media con prestación definida, tienen diferente forma de distribución del monto de los aportes, pues recordemos que mientras en el RPM el 13% de los aportes son destinados a financiación de pensión de vejez y reservas y el 3% a pensión de sobrevivientes e invalidez y gastos de administración, en el régimen de ahorro individual con solidaridad tan solo el 11.5% del aporte va dirigido a la cuenta de ahorro individual con solidaridad, el 3% para seguros previsionales y gastos de administración y 1.5% al fondo de garantía de pensión mínima, por lo que el eventual traslado de lo consignado en la cuenta de ahorro individual con solidaridad, no corresponder porcentualmente a lo que en el régimen de prima media se destina para la financiación, en este caso de la pensión de vejez.

De igual manera es evidente que han pasado muchos años en los cuales la demandante no contribuyó con el fondo común que financia las pensiones de las personas que han guardado fidelidad al régimen de prima media con prestación definida, ello conlleva al detrimento patrimonial que pretende evitar el principio de sostenibilidad financiera, pues basta con citar el artículo 20 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7º de la ley 797 de 2003, que a su vez incrementó el valor del aporte mediante decreto 4981 de 2007 al 16% para aporte a pensiones, en los cuales se estipuló que:

"ARTÍCULO 7o. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.

En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

(...) El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales"

El incremento se dio a través del decreto 4982 de 2007 que estipuló:

"Artículo 1º. Cotización al Sistema General de Pensiones. A partir del 1º de enero del año 2008, la tasa de cotización al Sistema General de Pensiones será del 16% del ingreso base de cotización"

Conforme a lo anterior, es evidente que el eventual traslado de régimen pensional de la demandante, afecta significativamente el sistema financiero del RPM, teniendo en cuenta la variación porcentual de la destinación del aporte en ambos regímenes pensionales, la falta de contribución de la demandante al fondo común que financia las pensiones en el RPM y la carga que generaría en los demás afiliados soportes un eventual reconocimiento pensional a favor de la demandante, quien no ha construido un derecho pensional en el régimen de prima media.

4. LEGISLACIÓN APLICABLE AL CASO

4.1. Artículo 2º DE LA LEY 797 DE 2003.

Es necesario precisar para el caso que nos ocupa, que la demandante se encuentra inmersa en una prohibición preceptuada en el artículo en mención, mismo que reza lo siguiente:

"Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:

Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"

Revisando los hechos de la demanda, se tiene que la demandante a la fecha de solicitud de traslado del RAIS al RPM, ya se encontraba inmersa en la prohibición de que trata el artículo 2 de la ley 797 de 2003 por estar a menos de 10 años de cumplir la edad mínima exigida por la Ley para acceder a esta prestación, por lo que se enmarca su situación en la norma antes citada, de allí que COLPENSIONES, actuando bajo los preceptos normativos negó el pretendido traslado.

4.2. ARTÍCULO 113 DEL LA LEY 100 DE 1993.

"Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:

a) Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;

b) Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización".

De la norma en cita se desprende que no basta con trasladar los aportes realizados efectivamente cotizados al Fondo Privado de Pensiones, sino que la AFP debe emitir el respectivo bono pensional donde se incluya el saldo de la cuenta individual y los rendimientos, para luego si realizar la respectiva aprobación del traslado de régimen y de aportes.

4.3. SENTENCIA C-1024 de 2004.

En el presente caso, la medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima

Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.

4.4. INCISO 4º ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 / SENTENCIA C 789 DE 2002 y ARTICULO 3º DEL DECRETO 3800 DE 2003.

La ley 100 de 1993 en su artículo 36, estableció el régimen de transición para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la citada ley, esto es 1º de abril de 1994, acreditaran bien sea el cumplimiento de la edad, 35 años para las mujeres y 40 años para los hombres o 15 años de servicio o cotizaciones. Sin embargo, en el inciso 4º del artículo en mención, se estableció la inaplicabilidad del régimen de transición para quienes se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad. Posteriormente, este inciso fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en sentencia de fecha 24 de septiembre de 2002, bajo el radicado C789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, estableciendo que el régimen de transición no será aplicable a quienes se trasladen al régimen de ahorro individual, con excepción de quienes acrediten haber tenido 15 años o más de servicios cotizados al 1 de abril de 1994, requisito que ha sido reiterado en sentencia C 1024 de 2004 y SU 062 de 2010.

4.5. ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993:

"Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen (...)"

4.6. LEY 71 DE 1988

"A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas"

4.7. DECRETO 3800 DE 2003.

"Artículo 3º. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una persona que a 1º de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último. En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le será computado al del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional (...)"

4.8. ARTÍCULOS 9, 11, 1509 Y 1754 DEL CÓDIGO CIVIL:

Ante las manifestaciones que sirvieron de sustento al contestar las pretensiones de la demanda, es claro evidenciar que estamos en presencia de una negligencia por parte del demandante, teniendo en cuenta que desconoce los preceptos normativos que contiene la Ley de seguridad social (Ley 100 de 1993), al indicar que las AFP son las que tienen la obligación de informar sobre ventajas y desventajas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al cual se encuentra válidamente afiliado a la fecha. Y es que esta situación configura un desconocimiento de la norma en mención, misma que a voces del artículo 9º de la Codificación Civil, no sirve de excusa para declararla absuelta de cualquier culpa o error que haya conocido, máxime cuando en la Ley 100 de 1993, se evidencia la explicación y funcionamiento de los regímenes existentes en nuestro sistema de seguridad social.

Y es que el pilar de la presente acción es la omisión de las AFP demandadas, por cuanto estas, se hicieron presentes en la antesala de la afiliación a la presente data en la que la demandante aún se encuentra afiliada, interregno en el cual, debe de conocer por su propia cuenta la norma que regula el régimen para el cual efectúa sus aportes, pues el artículo 11 del Código Civil es claro al manifestar que los efectos de la ley se surten a partir de la promulgación de estos, lo que hace imperioso el conocimiento de la norma que regula los derechos, deberes y obligaciones como afiliado de un régimen, el cual, sin lugar a equívocos regula el artículo 59 y s.s. de la ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas su señoría, en el presente asunto no se puede configurar un vicio del consentimiento, por cuanto se configura un ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO, el cual no vicia el consentimiento de las partes, al ser claro el contenido de la ley que regula el funcionamiento de los regímenes pensionales existentes.

No se puede pasar por alto que al suscribir un formulario de afiliación, medió el consentimiento de la parte contratante, situación que puede declararse nula al evidenciarse un vicio en el ya mencionado consentimiento, mismo que puede ser saneado con el paso del tiempo tal como lo preceptúa el artículo 1754 del Código Civil:

"RATIFICACIÓN TÁCITA: La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada".

Vemos entonces claramente, como el Código Civil regula el saneamiento de la nulidad, que para el caso de marras se dio con la ratificación tácita de la demandante al permanecer al RAIS, efectuando los aportes a los riesgos de vejez, invalidez y muerte.

4.9. SL 373 DE 2021

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 373-2021, moderó el precedente respecto a la posibilidad de materializar los efectos de la ineficacia, esto es, retrotraer las cosas al estado anterior, tratándose de demandantes que ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirieron el estatus de pensionados en el régimen de ahorro individual.

A este respecto, el Alto Tribunal de la especialidad laboral reflexionó que al haberse adquirido la calidad de pensionado, se produce la imposibilidad de retornar al estatus quo ante, es decir, tal condición no puede deshacerse o desaparecerse del plano jurídico, pues ello conllevaría a:

"disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto."

Porque no es posible revertir ciertos efectos económicos como el deterioro que sufre el capital que ya ha sido objeto de pago a través de mecanismos de financiación como los bonos pensionales y las cuotas partes de entidades contribuyentes, como consecuencia ineludible del pago de mesadas pensionales. En efecto, es irreparable la pérdida de integridad del músculo financiero con que se respalda el pago de la prestación, por lo que forzar a través de una ficción jurídica la vuelta al estado anterior en que se encontraba las cosas, va en detrimento de los recursos de la Seguridad Social, bien sea que provengan de la Nación y/o demás entidades que deben contribuir al financiamiento del pasivo pensional.

Sumado a lo anterior, se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre otras muchas problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del Sistema que han confluído en la gestión de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del Sistema General de Pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarrea.

En conclusión, no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades, situación que deberá verificarse en el caso de la señora **SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA**.

Razones por las cuales, no debe accederse a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia deberá **Absolverse**, a Colpensiones de todas aquellas incoadas en su contra.

5. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones tanto declarativas como condenatorias de la demandante y en consecuencia solicito se absuelva a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** de todas y cada una de las peticiones que en su contra se formulan, por las razones que se esgrimen en los acápites de la oposición, hechos y razones de la defensa y fundamentos de las excepciones que se enuncian a continuación y se condene al demandante al pago de las costas incluyendo agencias en derecho en los términos del numeral 1 del artículo 365 y 366 del C.G.P. en aplicación analógica prevista por el Artículo 145 del C.P.T.S.S.

A LAS DECLARATIVAS:

A LA PRETENSIÓN PRIMERA: ME OPONGO a que se DECLARE LA NULIDAD de la afiliación al sistema del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de la señora SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA realizada por las AFP demandadas, (HORIZONTE S.A HOY PORVENIR S.A - COLFONDOS S.A Y PROTECCIÓN S.A) por medio de la cual se le trasladó del régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrada por el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, hoy, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, "COLPENSIONES", al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2º de Ley 797 de 2003 que modificó el literal "e" del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliado al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por la demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que la demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello implicaba, y no fue sino hasta después de más de **27** años de encontrarse afiliada y después de acreditar menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: ME OPONGO a que se declare la libertad de la señora SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA de afiliarse al régimen de prima media con prestación definida, al declararse la nulidad de la afiliación al sistema del régimen de ahorro individual hoy con afiliación a PROTECCIÓN S.A.; toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2º de Ley 797 de 2003 que modificó el literal "e" del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliada al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por la demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

A LAS CONDENATORIAS:

A LA PRETENSIÓN PRIMERA: ME OPONGO a condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a recibir a la señora Sandra Santos, como afiliada cotizante; toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2º de Ley 797 de 2003 que modificó el literal "e" del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliada al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por la demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que la demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello implicaba, y no fue sino hasta después de más de **27** años de encontrarse afiliada y después de acreditar menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: ME OPONGO a condenar a las demandadas, Sociedades Administradoras de Fondos Pensiones Y cesantías (HORIZONTE S.A HOY PORVENIR S.A COLFONDOS S.A Y PROTECCIÓN S.A), a liberar de sus bases de datos, a la señora en mención, y, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES; toda vez que la afiliación al RAIS se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2º de Ley 797 de 2003 que modificó el literal "e" del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante solicitó nulidad de traslado de régimen pensional y mesada pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliada al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por la demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

A LA PRETENSIÓN TERCERA: ME OPONGO a que se CONDENE a las demandadas, (HORIZONTE S.A hoy PORVENIR S.A. COLFONDOS S.A Y PROTECCIÓN S.A), a lo extra y ultra petita debatido y probado en el proceso; toda vez que, teniendo en cuenta el principio de consonancia, no les es dado al juez ni a las partes modificar la causa petendi a través del señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de modificaciones a las pretensiones en oportunidades diferentes a las previstas legalmente, so pena de incurrir en vulneración de dicha garantía e igualmente atendiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia reiterado en sentencia CSJ SL9576 del 2016, donde manifestó que: *"dicha facultad extra petita no es absoluta y encuentra un límite en tratándose de prestaciones que no fueron objeto de la reclamación administrativa..."*².

² Sentencia SL 9576 del 13 de julio de 2016 Rad. 45897 acta 25 M.P. Rigoberto Echeverri Bueno Pág. 20 reiterada de las sentencias (CSJ SL8603-2015, CSJ SL Rad 50550 del 1 de julio de 2015 y SL 19452 del 13 de setiembre de 2017 M.P. GERARDO BOTERO ZULUAGA).

A LA PRETENSIÓN CUARTA: ME OPONGO a condenar a las demandadas, (HORIZONTE S.A. HOY PORVENIR S.A COLFONDOS S.A Y PROTECCIÓN S.A) Y COLPENSIONES al pago de las costas procesales que genere el presente proceso; toda vez que mi representada siempre ha actuado de buena fe y no puede tener un desvío normativo al estar en la prohibición del traslado de la demandante por estar a más de los últimos 10 años de cumplir la edad de pensión.

6. EXCEPCIONES PERENTORIAS

6.1. APLICACIÓN DEL PRECEDENTE ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA SL 373 DEL 2021.

Propongo esta excepción, para que se tenga en cuenta la morigeración efectuada al precedente, claro en establecer que no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades, situación equivalente a la devolución de saldos.

6.2. EL ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO NO VICIA EL CONSENTIMIENTO

Encuentra vocación de prosperidad esta pretensión por cuanto el artículo 1509 de la codificación Civil manifiesta que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, y es claro que la demandante en los términos de los artículos 9º y 11 ibídem, al trasladarse al RAIS tenía la obligación de conocer la ley 100 de 1993, pues dentro de este cuerpo normativo se establece de manera clara y precisa el funcionamiento de dicho régimen pensional así como también el de Prima Media con prestación definida, para que por su propio raciocinio tomara la decisión de permanecer afiliada al ISS o trasladar sus aportes, por lo tanto no puede decir que hubo un vicio del consentimiento, en especial cuando se trata de un supuesto ocultamiento de la información, pues si bien la H. Corte Constitucional ha indicado que las Administradoras de Fondo de Pensiones tienen el deber del buen consejo, lo cierto es que la afiliada o quien pretende ser afiliado no puede desconocer la norma ya citada pues la misma es obligatorio conocimiento para su aplicación y la demandante se escuda en un desconocimiento de la norma que los términos del artículo 9 del Código Civil no la exime de responsabilidad alguna tanto de sus derechos como de sus obligaciones.

6.3. DESCAPITALIZACIÓN DEL SISTEMA PENSIONAL

De otro lado, es importante tener en cuenta el tema referente a la sostenibilidad financiera del sistema Pensional, del cual la CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-242 de 2009. Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, expresó:

"Las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios individuales y beneficios al sistema (artículo 48 CP, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005). Ello explica que esta Corte haya puesto de presente que el Legislador no está obligado a sostener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las Leyes vigentes, en un momento determinado. Su potestad de configuración legislativa le habilita a modificar los regímenes jurídicos en función de nuevas variables, razones de oportunidad o conveniencia, y a otros intereses y circunstancias contingentes que deba priorizar para lograr los fines del Estado Social de Derecho, desde luego, consultando parámetros de justicia y equidad, y con sujeción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad."

En igual sentido la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 del 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C-062 del año 2010; en esta sentencia la corte claramente dijo lo siguiente:

(...)el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...)

Desde esta perspectiva si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)

Ahora bien, se debe tener en cuenta que el RAIS y el RPM tienen diferente forma de distribución del aporte, por lo cual **27** años en los cuales la demandante no ayudó a financiar las pensiones y mi representada no cobró gastos de administración, van en detrimento patrimonial en caso de que el demandante regrese, pues basta con citar el artículo 20 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7º de la ley 797 de 2003, que a su vez incrementó el valor del aporte mediante decreto 4981 de 2007 al 16% para aporte a pensiones, en los cuales se estipuló que:

"ARTÍCULO 7o. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.

*En el régimen de prima media con prestación **definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.***

*En el régimen de ahorro individual con solidaridad **el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.***

(...)

El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales."

El incremento se dio a través del decreto 4982 de 2007 que estipuló:

"Artículo 1º. Cotización al Sistema General de Pensiones. A partir del 1º de enero del año 2008, la tasa de cotización al Sistema General de Pensiones será del 16% del ingreso base de cotización"

Se puede evidenciar entonces que si impacta en el sistema financiero el traslado de régimen de los aportes realizados al RPM del RAIS, sin el respeto del término estipulado

en la ley toda vez que la distribución es distinta teniendo en cuenta las características del mismo, ya que en el RPM se utiliza para financiar pensiones, sin mirar los riesgos que existen en el RAIS, por lo cual mi representada daría la utilización del aporte conforme le conviene al régimen.

En el año 2018 Colpensiones tenía programado presupuestalmente solicitar al nivel central \$14,39 billones de pesos, de los cuales únicamente solicitó el 63,7%, equivalente a \$9,16 billones de pesos, esto indica que se requirieron \$5,2 billones de pesos menos de lo presupuestado para el pago de pensiones reconocidas por vía administrativa y en cumplimiento de un fallo judicial.

Si bien, en los últimos años se ha evidenciado una disminución de las transferencias efectuadas por la nación a Colpensiones para el financiamiento de prestaciones económicas, como consecuencia directa de la gestión financiera realizada por la entidad, no hay que desconocer que para el año 2018, el Estado respaldó el 33% de la nómina de Colpensiones, por cuanto los recursos disponibles resultaron insuficientes para la misma.

Conforme lo anterior es claro que mi representada para ese año se tuvo una inyección de capital del PGN de 12,3 **Billones de pesos**, y para el año **2020 el capital es de \$43,29 billones** teniendo en cuenta que los aportes propios que recaudan no suplen el pago de pensiones y demás gastos de la Administradora Colombiana de pensiones.

La Constitución de 1991 en su artículo 1º establece que *"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general"*.

El Acto Legislativo 03 de 2011 integró a la Constitución Política el Principio de Sostenibilidad Fiscal, como un criterio de orientación de los diferentes órganos del poder público en Colombia, con el objeto de garantizar el financiamiento de los bienes y servicios brindados por el Estado, el cumplimiento frente a la deuda pública, reducir el nivel de endeudamiento y gasto público y en adoptar medidas económicas en procura de propiciar la sostenibilidad económica.

La sostenibilidad fiscal como condición para el desarrollo del Estado Social de Derecho, consiste en adoptar un derecho que contribuye a proteger a todos los demás y a darles continuidad bajo las diferentes condiciones que enfrente la economía para atender sus deberes sociales, resultando de gran connotación para el progreso económico y social del país en la medida que busca que, ante una determinada y limitada capacidad para recaudar ingresos y para acceder a recursos de financiamiento, la política de gasto pueda mantenerse o sostenerse en el tiempo, de manera que en el mediano y en el largo plazo se logren los objetivos públicos.

Respecto a este principio la Corte Constitucional señaló que, *"...la adopción del principio de sostenibilidad fiscal implica el compromiso de las autoridades del Estado en todos sus órdenes de acuerdo con sus competencias, en la expedición de normas, reglamentos, fallos, entre otros; que garanticen el avance de protección los DESC, principalmente bajo criterios programáticos en cumplimiento del mandato de progresividad, siempre que este se desarrolle bajo un parámetro de sostenibilidad, como criterio adicional de exigibilidad e interpretación constitucional, en realidad no es un principio constitucional, sino una herramienta para la consecución de los fines del ESDD³*. En consecuencia, desde la perspectiva constitucional existe una estructura económica que permite dar cumplimiento tanto a los principios como a los derechos consagrados en la Constitución.

³ Sentencia 288 de 2012 Corte Constitucional

La noción de costo, entendida como el Gasto que ocasiona algo⁴, para Colpensiones se visualiza **en el valor de los recursos del sistema pensional**, que utiliza la Administradora para subsidiar las pensiones que se den con ocasión de la declaratoria de nulidad o ineficacia de afiliación, está impactando significativamente la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, cuya observancia y protección expresamente dispuso el Acto Legislativo 01 de 2005.

Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado:

"El juez constitucional no puede ser ajeno al hecho de que una afectación grave de los ingresos y recursos del sistema de seguridad social no sólo perjudica la estabilidad financiera de la entidad administradora, sino también los derechos prestacionales de sus afiliados (..)"⁵ (Negrillas fuera del texto original)

La Corte Constitucional se pronunció sobre la importancia de la estabilidad financiera del sistema general de pensiones, en la sentencia C-111 de 2006, mediante la cual declaró parcialmente exequible los literales d) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

En esa oportunidad señaló:

"En cuanto a la adecuación y conducencia de la medida legislativa prevista en la norma demandada, esta Corporación debe reconocer que mediante dicha herramienta legal se pretende salvaguardar la solvencia financiera del régimen general de pensiones. Así las cosas, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes (...)" (C.P. arts. 48 y 53).

// Lo anterior por cuanto la situación actual del sistema, principalmente el de prima media presenta grave riesgo en su estabilidad financiera y por ello es preciso restringir el pago de las pensiones al universo de beneficiarios con real derecho". (Negrillas fuera del texto original)

En la actualidad las decisiones tomadas por los despachos judiciales de declarar la nulidad o ineficacia de afiliación quebranta el principio de sostenibilidad financiera consagrado en el artículo 48 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues genera una situación caótica que desvertebra la debida planeación en el pago de las pensiones de las personas que venían aportando al sistema ayudando al sostenimiento del mismo, desdibujando totalmente el Régimen de Prima Media.

La estabilidad financiera se garantiza en la medida en que el sistema general de pensiones percibe y mantiene, a través de medios jurídicos y financieros, los fondos económicos adecuados que le permitan pagar mes a mes a una mayor cantidad de pensionados y obtener un ahorro para precaver la satisfacción de las pensiones futuras, bajo la permanente orientación de subsanar con urgencia cualquier desventaja contra el bienestar general.

Para los fines de esta excepción interesa señalar que la Corte Constitucional al pronunciarse sobre temas, como, por ejemplo, el de la progresividad en el conjunto de los derechos y disponibilidad de los recursos para el efecto, respetando la sostenibilidad fiscal, doctrina constitucional contenida en sentencias como la C-1052 de 2012, ha puntualizado que:

⁴ Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas . 30 de abril de 2019, de Real Academia Española Sitio web: <http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=costo>

⁵ Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.

*"El propósito del Acto Legislativo que ahora se presenta, es señalar al Congreso, así como a los demás órganos del Estado en todos los niveles, y según sus competencias, el deber de buscar, en forma deliberada, que sus diferentes decisiones **faciliten el logro de una sostenibilidad fiscal, como instrumento de protección de los derechos sociales de los colombianos, y como tal, de la realización de los fines del Estado Social de Derecho**". (Negrillas fuera del texto original)*

Ahora bien, no solo la jurisprudencia nacional ha destacado el deber Estatal de protección al derecho a la seguridad social, desde la perspectiva del principio de sostenibilidad fiscal y de estabilidad financiera, sin que ello implique su regresividad, con miras a mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos y fortalecer el sistema, pues, sobre el punto resulta pertinente recordar que la Comisión Interamericana de Derechos humanos consideró, en el caso de la Asociación Nacional de ex servidores del Instituto Peruano de la Seguridad Social y otras contra Perú, respecto de las pensiones excesivamente altas en comparación con la situación de los demás pensionados, lo siguiente:

"(...)
- **Mantener la estabilidad financiera del Estado y asegurar que el régimen de seguridad social se encuentre basado en el principio de equidad, constituye un interés social y un fin legítimo del Estado en una sociedad democrática, y por tanto, en aras de hacer efectivos estos intereses los Estados tienen la obligación de tomar las medidas pertinentes.**
- **La limitación impuesta al derecho a la pensión puede ser proporcional si se configura como un mecanismo idóneo para asegurar la estabilidad financiera del Estado y eliminar la inequidad en el sistema de seguridad social.**
- **La restricción en el ejercicio de un derecho no es sinónimo de regresividad, pues la obligación de no regresividad implica un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho con relación a las implicaciones colectivas de la medida**⁶". (Negrillas para destacar).
(...)".

Colpensiones como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional, debe velar, en todo momento, por la protección de los dineros del erario destinados a sustentar el Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Es necesario traer a colación el principio constitucional contemplado en el Artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1º, del Acto Legislativo 01 de 2005, así:

*"El Estado garantizará los derechos, **la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional**, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas." (Cursiva, Negrilla y Subrayado para destacar).*

En ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al interés general sobre el particular, se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política en esta materia.

El derecho a la seguridad social está estructurado de tal modo que se requiere de los siguientes elementos:

1. Las instituciones encargadas de la prestación del servicio.
2. Los procedimientos bajo los cuales este deben funcionar las administradoras de pensiones.
3. La provisión de fondos, con la sostenibilidad financiera asegurada de manera que garanticen su buen funcionamiento.

⁶ Dicho pronunciamiento aparece citado en la Sentencia C-258 de 2013.

En este punto cobra especial importancia la labor del Estado, el cual, por medio de asignaciones de recursos fiscales y la legislación, tiene la obligación constitucional de brindar las condiciones, tanto jurídicas como presupuestales, para que los dineros destinados al pago de la seguridad social en pensiones mantengan el equilibrio financiero y, de este modo, garantizar el goce del derecho irrenunciable a la seguridad social.

En la regulación de este derecho fundamental, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración, las normas constitucionales e internacionales⁷ no fijan un determinado modelo de seguridad social por lo que, mientras se asegure su correcta prestación, bien puede darse rienda a la creatividad legislativa orientada por instrumentos internacionales como las observaciones del comité de derechos económicos, sociales y culturales⁸.

Por parte de la Corte Constitucional, la seguridad social configura un derecho de carácter irrenunciable compuesto de un conjunto de garantías mínimas que reconocidas a quienes sufran menoscabo en su integridad a causa de los riesgos o contingencias inherentes a la vida en sociedad⁹. Con fundamento primero en la dignidad humana, el Estado debe asegurarse del cubrimiento de estas contingencias con atención a los principios de universalidad, eficiencia, solidaridad y, desde el acto legislativo 01 de 2005, sostenibilidad fiscal, principio que asegura que "cualquier regulación futura que se haga del régimen pensional debe preservar el equilibrio financiero del sistema general de pensiones" (subrayado fuera de texto original)¹⁰.

Son por los anteriores argumentos su señoría que no se debe declarar la nulidad o ineficacia del traslado, pues el último será del patrimonio público del cual se entre a pagar la pensión que llegare a percibir la parte demandante, ya que dado que su ahorro se hizo de manera individual no ayudó a financiar las pensiones de los demás pensionados del RPM y su ahorro no será suficiente para financiar su propia pensión.

En el eventual caso que sea declarada la nulidad ruego a su despacho considerar la realización de un cálculo actuarial a cargo bien sea del fondo responsable del vicio o de la demandante, para soslayar la descapitalización del sistema, teniendo en cuenta que como lo menciona la sentencia SU 062 de 2010, para que una persona pudiera acceder al traslado por cumplir el requisito de 750 semanas, este adicionalmente tendría que pagar un cálculo de rentabilidad, y en estos casos no puede ser desconocida esta consideración.

6.4. PRESCRIPCIÓN:

Sin que de ninguna manera se entienda reconocimiento de los hechos y pretensiones aducidas por la demandante, se propone esta excepción correspondiente a cualquier derecho que eventualmente se hubiese causado a favor de la demandante y que de conformidad con las normas legales y con las probanzas del juicio, quedaran cobijado por el fenómeno jurídico de la prescripción y la caducidad. Prescripción establecida en el art 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

6.5. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

Las resoluciones o actos administrativos proferidos por la entidad que represento mediante los cuales resolvieron negativamente las solicitudes de la accionante se encuentran amparadas legalmente con base en la documentación que reposa en la entidad, una vez llenos los requisitos para su formación adquieren fuerza obligatoria y gozan de presunción de legitimidad.

⁷ Artículo 25-1 de la declaración universal de los derechos humanos.

⁸ Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-613 de 2013

⁹ Corte Constitucional, Sentencias C-258 de 2013, C-1024 de 2004.

¹⁰ Corte Constitucional, sentencia C-078 de 2018. Sentencia que resalta dicho propósito en la exposición de motivos al proyecto de Acto Legislativo No. 127 de 2004 Cámara

6.6. COBRO DE LO NO DEBIDO:

Por cuanto mi representada no adeuda derecho alguno al demandante por los conceptos aquí demandados, en razón a que no se encuentra afiliada al Régimen de prima media con prestación definida.

6.7. BUENA FE:

La entidad que represento siempre ha actuado dentro de los parámetros legales y Constitucionales, amparado en el principio de la Buena Fe tanto de esta entidad como de las entidades o personas que acuden a ella en calidad de usuarios o afiliados y en desarrollo de lo expresado en nuestra carta magna artículo 83 que indica que:

"las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".

6.8. INEXISTENCIA DEL DERECHO

En razón que el traslado se realizó con plena voluntad de la cotizante, no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por la accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y condenar a mi representada a recibir los aportes para activar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, teniendo en cuenta que por decisión propia solicitó su afiliación al RAIS, igualmente la actora se encuentra inmersa en la prohibición legal establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 para trasladarse de régimen.

6.9. INNOMINADA O GENÉRICA:

Solicito al señor Juez que si encuentra probados hechos que constituyan una excepción, se sirva reconocerla de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del C.G.P aplicado por analogía según lo dispuesto por el artículo 145 del CPTSS.

7. NO PROCEDENCIA AL PAGO DE COSTAS EN INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ORDEN PÚBLICO

Sin que de manera alguna pueda considerarse aceptación de los hechos y pretensiones de la demanda, se solicita al Despacho, que bajo los siguientes parámetros legales, que permiten al fallador de instancia abstenerse de esta condena por las razones y fundamentos de derecho que relaciono así:

En primer lugar, solicito la aplicación del Artículo 48 de la Constitución Política que prescribe:

"Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante."

En este punto resalto el inciso 4º de este artículo en el que se refiere que no se podrán destinar los recursos de mí representada para fines diferentes a ella, por lo cual es dable interpretar, que el pago de costas y agencias en derecho serian contrarios a esta preceptiva constitucional.

Ahora bien, el legislador en el artículo 365 del C.G.P en su numeral 5º, otorgó a los jueces, la posibilidad de no imponer las costas procesales en casos en que prosperen parcialmente las pretensiones como se observa de la siguiente cita:

"Artículo 365. Condena en costas.

En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión"

Ahora bien, teniendo en cuenta la realidad de la jurisdicción ordinaria laboral, los procesos ejecutivos en contra de mi representada, se basan en el pago de costas, por lo que, la no condena de estas evitaría la congestión judicial, salvaguardando principios de sostenibilidad financiera del sistema pensional, amparados bajo el principio de legalidad.

8. PETICIÓN ESPECIAL

Sin el ánimo de aceptar alguno de los supuestos planteados en la demanda, solicito al despacho que de no acceder a los planteamientos de la defensa y ante la eventual declaratoria de nulidad y/o ineficacia y condena de aceptar la afiliación del demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, dicha condena esté supeditada al traslado efectivo de la totalidad de valores consignados en la cuenta de ahorro individual con solidaridad del demandante, así como los dineros destinados a seguros previsionales, gastos de administración, rendimientos, fondo de garantía de pensión mínima y fondo de solidaridad pensional de aplicar al caso de las **AFP PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A. o cualquier otro fondo donde estuvo afiliada la demandante y que fueron suprimidos o fusionados con las AFP mencionadas.**

Lo anterior teniendo en cuenta que los derechos pensionales que pueda llegar a adquirir la demandante en el régimen de prima media con prestación definida, deben ser consecuencia del traslado efectivo de los aportes de la demandante a Colpensiones, pues de no ser así y de obligarse a la entidad que represento a reconocer cualquier tipo de derecho sin contarse con los aportes realizados por la demandante a la administradora en la que estuvo afiliada en el régimen de ahorro individual con solidaridad, generaría un impacto en el sistema financiero de Colpensiones, es por ello que solicito que de ser adverso a los intereses de mi representada, en el fallo se incluya la obligación de aceptar el traslado de la demandante una vez se haga el traslado efectivo de los aportes realizados en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

9. MEDIOS DE PRUEBA

Solicito se tengan, decreten y practiquen como medios de prueba de las excepciones propuestas las siguientes:

9.1.DOCUMENTALES

Copia del **expediente administrativo e historia laboral** de la parte demandante **SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA 51809549**, los cuales se allegaran de manera oportuna tan pronto Colpensiones los entregue a esta oficina.

9.2.INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito se cite a la parte demandante **SANDRA PATRICIA SANTOS VALDERRAMA**, c.c. **51809549**, para rendir interrogatorio de parte que formularé con reconocimiento de documentos, en la hora y fecha establecidas por su despacho, para probar la inexistencia de falta de información o configuración de vicios en el consentimiento.

9.3.OFICIOS O EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

9.3.1. Conforme al artículo 265 del Código general del Proceso solicito se oficie o se ordene a las AFP PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN con el fin que exhiban y alleguen las siguientes certificaciones:

- 9.3.1.1.** Certificación donde se evidencie el total de los descuentos por concepto de gastos de administración realizados mes a mes de la cuenta de ahorro individual de la demandante durante su afiliación.
- 9.3.1.2.** Certificación donde se evidencien todos los contratos con su respectivo valor de los seguros provisionales realizados por la AFP con las aseguradoras, para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte y cualquier otro riesgo que generó durante su afiliación.
- 9.3.1.3.** Certificación donde se evidencia el valor del bono pensional si lo hubiere a favor de la parte actora durante su afiliación.
- 9.3.1.4.** Certificación donde se evidencie el total de los valores consignados mes a mes al fondo de garantía de pensión mínima durante su afiliación.
- 9.3.1.5.** Certificación donde se evidencie el total de los valores consignados mes a mes al fondo de solidaridad pensional durante su afiliación.
- 9.3.1.6.** Certificación donde se evidencia el valor de los rendimientos pensionales de la demandante mes a mes durante su afiliación.

Lo anterior con el fin de determinar los valores exactos que han sido descontados de la cuenta de ahorro individual de la afiliada, poder tasar efectivamente la cuantía de la presente demanda, igualmente son necesarios en caso que se profiera sentencia condenatoria con el fin de tener exacta claridad de los valores que debe recibir mi representada y sobre ellos poder liquidar una posible indexación a favor de Colpensiones tal como se pide en el capítulo 8, petición especial, de la presente contestación.

De no ser así y de obligarse a la entidad que represento a reconocer cualquier tipo de derecho sin contarse con los aportes realizados por la demandante a la administradora en la que estuvo afiliado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, generaría un impacto en el sistema financiero de Colpensiones.

9.4.OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS

Las que la señora Juez considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia, para lo cual ruego se de aplicación al inciso final del artículo 170 del C.G.P, que reza:

"Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes"

10. SOLICITUD CONDENA EN COSTAS

Solicito al Señor Juez, en nombre de mi poderdante, que de ser negadas las pretensiones y condenas y probadas las excepciones de la demanda, la parte actora sea condenada al pago de las costas y agencias en derecho a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Además de lo anterior, en el evento de prosperar parcialmente las excepciones propuestas solicito respetuosamente tenga en cuenta al fallar, el numeral 5° del artículo 365 del Código General del Proceso, el cual expresa:

"En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión."

11. ANEXOS

11.1. Escritura pública N° 1186 del 17/05/2023 de la Notaría 02 del Circulo de Bogotá mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones le otorga facultades de representación judicial a la firma Tabor Asesores Legales SAS, la cual se encuentra representada legalmente por la Abogada María Camila Ríos Oliveros.

11.2. Sustitución de poder otorgada para actuar en el proceso de la referencia.

12. NOTIFICACIONES

La demandante en la dirección aportada al proceso.

Mi poderdante, en la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, carrera 10 No. 72 – 33 torre B piso 11 Bogotá y en el correo electrónico notificacionssl@mejiasociadosabogados.com

La suscrita apoderada judicial en la secretaria de su despacho y a los correos electrónicos notificaciones@taborabogados.com y dtorres@taborabogados.com

Cordialmente,



DIANA LEONOR TORRES ALDANA
C.C. No. 1.069.733.703 de Fusagasugá
T.P. No. 235.865 del C.S. de la J.

DIANA LEONOR TORRES ALDANA

C.C. 1.069.733.703 de Fusagasugá Cund.

T.P. 235.865 del Consejo Superior de la Judicatura.

RP/2410

RV/ SM

República de Colombia

1
REPÚBLICA DE COLOMBIA

NOTARÍA SEGUNDA (2ª) DE BOGOTÁ, D.C.

Código: 110010002

(Resolución 1626 de 2002, art. 2 S. N. y R.)

La veracidad de este documento podrá ser
verificada en la plataforma del VUR página
www.vur.gov.co repositorio de poderes.

Código de verificación: 1684524TTT56

Fecha: 19 MAY 2023



NOTARIA SEGUNDA
DE BOGOTÁ D.C.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

DE FECHA:

DIECISIETE (17) DE MAYO

DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023).

OTORGADA EN LA NOTARÍA SEGUNDA (2ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ,
DISTRITO CAPITAL.

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

IDENTIFICACIÓN

PODERDANTE:

PODERDANTE:

Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE.

NIT. 900.336.004-7

APODERADO:

TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. NIT. 900.442.223-7

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), ante el despacho de la Notaría Segunda (2ª) del círculo de Bogotá D.C., cuyo Notario Encargado es DANIEL JOSE MARTINEZ MARIÑO, según Resolución No. 07267 del 23 de Junio de 2022 de la Superintendencia de Notariado y Registro, se otorga la presente escritura pública que se consigna en las siguientes cláusulas y

para ser notarial para uso exclusivo de la escritura pública - fin tiene costo para el usuario

13-04-23 PC010522735

13-04-23 PC010522735

términos.=====

COMPARECENCIA:

COMPARECIERON CON MINUTA ESCRITA Y ENVIADA:=====

Compareció **DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía número CC 79.983.390 expedida en Bogotá D.C., de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, calidad que acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien manifestó que en aplicación de los artículos 440 y 832 del Código de Comercio; el artículo 2142 del Código Civil y la Circular básica Jurídica Capítulo III Título I Parte 1 de la Superintendencia Financiera de Colombia, confiere poder general, amplio y suficiente a **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, en nombre y representación de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, en los siguientes términos:=====

CLÁUSULA PRIMERA. – Otorgo por el presente instrumento público **PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a partir de la suscripción de la presente escritura a **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial, tendiente a la adecuada defensa de los intereses de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, ante las Autoridades Judiciales y el Ministerio Público, realizando todos los trámites, actos y demás gestiones requeridas en los procesos o procedimientos en los cuales la administradora intervenga como parte pasiva, y que se adelanten en cualquier lugar del territorio nacional; facultad esta que se ejercerá en todas las etapas procesales y diligencias que se requieran atender ante las mentadas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial. El poder continuará vigente en caso de mi ausencia temporal o definitiva como Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, de conformidad con el inciso 6 del artículo 76 del Código General del Proceso, el cual establece que *"tampoco termina*

República de Colombia

3

el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda." ==

CLÁUSULA SEGUNDA. – El representante legal de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, queda expresamente autorizado, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, para sustituir el poder conferido dentro de los parámetros establecidos en el artículo 77 del Código General del Proceso, teniendo con ello facultad el apoderado sustituto para ejercer representación judicial y extrajudicial, de tal modo que en ningún caso la Entidad poderdante quede sin representación judicial y extrajudicial, y en general para que asuma la representación judicial y extrajudicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES** =====

La representación que se ejerza en las conciliaciones sólo podrá adelantarse con sujeción a las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, **CLÁUSULA TERCERA.** – Ni el representante legal de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, ni los abogados que actúen en su nombre podrán recibir sumas de dinero en efectivo o en consignaciones por ningún concepto. ===== Queda expresamente prohibida la disposición de los derechos litigiosos de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, por parte del representante legal y de los abogados sustitutos que actúen en nombre de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, sin la autorización previa, escrita y expresa del representante legal principal o suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES** y/o del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones. =====

CLÁUSULA CUARTA. – Al representante legal y a los abogados sustitutos que actúen en nombre de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, les queda expresamente prohibido el recibo o retiro de las órdenes de pago de depósitos judiciales que se encuentren a favor de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, con NIT. 900.336.004-7. =====

**** HASTA AQUÍ LA MINUTA ENVIADA Y ESCRITA ****

ACEPTACIÓN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: El (los) otorgante (s)

señala el/los para uso exclusivo en la escritura pública - Sin tiene costo para el notario

PC010522736

12-04-22 PC010522736

VR0308231

PC078933222

08-02-23 PC078933222

FE08TWSKAG

THOMAS GIBBS & SONS

manifiesta (n) bajo la gravedad de juramento, que se entiende aceptado con la firma de la presente escritura pública, que SI da(n) su consentimiento para ser notificados por medio electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).====
LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE:

1. Han verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, números correctos de sus documentos de identificación, y aprueban este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. 2. Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y los otorgantes lo aprueban totalmente, sin reserva alguna, en consecuencia, asumen la responsabilidad por cualquier inexactitud. 3. Conocen la Ley y saben que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento. 4. Que serán responsables civil, penal y fiscalmente, en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales. **ADVERTENCIA NOTARIAL:** A los

otorgantes se les hizo la advertencia que una vez firmado este instrumento la Notaria no asumirá correcciones o modificaciones si no en la forma y casos previstos por la Ley, siendo esto solo responsabilidad de los otorgantes.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento público por los comparecientes y advertidos de su formalidad, lo hallaron conforme con sus intenciones, lo aprobaron en todas sus partes y lo firmaron junto con el suscrito notario quien da fe y lo autoriza.=====

La presente escritura se elaboró en las hojas de papel notarial números: =====
PO010522735 – PO010522736 – PO010522737 =====

Valor de los derechos Notariales:	\$74.900 =====
Superintendencia de Notariado y Registro:	\$7.950 =====
Cuenta Nacional del Notariado:	\$7.950 =====
I.V.A.	\$44.747 =====
Resolución 00387 de fecha 23 de enero de 2023 de la Superintendencia de Notariado y Registro =====	

**ACTA DE REPARTO NOTARIAL
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

Ordinario, Guiría Catalogada

Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones
postmordicados@colpensiones.gov.co
Carrera 109 T2-13 Torre A

2023-05-09 09:58:58

0000405 - PODER POR ESCRITURA PUBLICA

LA MATRICULA NO ES REAL DADO QUE PERTENECE A UN PODER GENERAL PARA REPRESENTACION

LEGAL

Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones 900 525 004-7 Tabor Asesoría Legales
S.A.S. 900 442 225-7
postmordicados@colpensiones.gov.co
macanillanico@gmail.com

9774

2023-05-09 10:33:35

SEGUNDA FOLIO

Ordinario, Guiría Catalogada

67539549d595a2c36d7164b44c05007

CIUDAD MARCA - BOGOTA

BOGOTA

0

0

50C-50000

CARLOS ENRIQUE MELENDEZ MONTAÑO

Director de Administración Notarial

Verificar en sistema

<https://www.sncr.superintendenciaderegiro.gov.co/verificar-acta-ordinaria-regular/67539549d595a2c36d7164b44c05007.pdf>

Código:

GM- GD - FR - 05 V.00

28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 203

PIK 57 + 113 520121

Bogotá D.C. - Colombia

<http://www.superintendenciaderegiro.gov.co>

correspondencia@superintendenciaderegiro.gov.co



PC078933221

08-02-23 PC078933221

OEPOSND08

THOMAS GREGG & SONS

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1975



U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1975



La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co por su código de verificación

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

NIT: 900336004-7

NATURALEZA JURÍDICA: Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Acuerdo No 2 del 01 de octubre de 2009. Se crea bajo la denominación ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. Colpensiones, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se crea como una Empresa Industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Acuerdo No 9 del 22 de diciembre de 2011. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

Oficio No 2012092076 del 28 de septiembre de 2012. La Superintendencia Financiera de Colombia no encuentra objeción para que Colpensiones inicie operaciones como Administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida.

Decreto No 2011 del 28 de septiembre de 2012. Artículo 1. Inicio de operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones como administradora de Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Artículo 2. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los afiliados y pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tiene el mismo régimen. Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, mantendrán su condición, derechos y obligaciones que tienen, en el mismo régimen administrado por Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, sin que ello implique una selección o traslado de régimen de Sistema General de Pensiones. Artículo 5. Pensiones Causadas. Las pensiones de los afiliados a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, causadas antes de la entrada en vigencia del presente decreto, serán reconocidas y pagadas por esta entidad, hasta tanto la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), asuman dichas competencias.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 4



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

ED961061.0M

08-02-23 PC078933220

IMPRESO EN COLOMBIA

PC078933220

República de Colombia

Modelo notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración de la Administradora Colombiana de Pensiones - (Colpensiones), está a cargo del Presidente, quien será su representante legal. PARAGRAFO 1. El Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), deberá cumplir con los requisitos de idoneidad exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las ausencias temporales o definitivas del Presidente serán suplidas por el Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales, cualquiera de los Vicepresidentes o por el Gerente de Defensa Judicial de la entidad, siempre que cumplan con los requisitos del cargo. (Acuerdo 007 del 31 de agosto de 2021). **FUNCIONES DEL PRESIDENTE.** Son funciones del Despacho del Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, las siguientes: 1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al desarrollo del objeto de COLPENSIONES, directamente, o través de tercerización de procesos, mediante corresponsales o cualquier otro mecanismo que permita mayor eficiencia en la prestación del servicio, expidiendo los actos administrativos que se requieran para tal efecto. 2. Ejercer la representación legal de la Empresa. 3. Delegar o constituir apoderados, especiales para la representación judicial y/o administrativa de COLPENSIONES. 4. Dirigir la formulación y ejecución de políticas y estrategias relacionadas con el manejo de la información y la comunicación externa y organizacional. 5. Dirigir las políticas, programas, planes y proyectos para el relacionamiento con los diferentes grupos de interés de COLPENSIONES y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 6. Dirigir la gestión comercial de la Empresa, que involucre el diseño de mercadeo, la divulgación y capacitación, la afiliación de nuevas personas y la administración y fidelización de quienes ya se encuentran afiliados. 7. Dirigir la gestión integral de servicio al cliente en caminata a la atención de los ciudadanos, empleadores, pensionados y demás grupos de interés que permitan satisfacer de forma efectiva, sus necesidades. 8. Impartir directrices para el diseño e implementación del Sistema de Administración Integral de Riesgos, de acuerdo a la normatividad legal vigente y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva. 9. Dirigir las políticas que en materia de Gobierno Corporativo adopte COLPENSIONES. 10. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto anual de presupuesto, los proyectos de adición y traslados presupuestales, con arreglo a las disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre la materia. 11. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los estatutos de COLPENSIONES, sus modificaciones y las condiciones generales de carácter salarial y prestacional de los trabajadores oficiales de COLPENSIONES. 12. Presentar a consideración de la Junta Directiva y para aprobación del Gobierno Nacional, las modificaciones a la estructura y a la planta de personal de COLPENSIONES. 13. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva los estados financieros y las operaciones de crédito de COLPENSIONES, de conformidad con las normas vigentes. 14. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el Código de Ética y Buen Gobierno, así como sus reformas o modificaciones, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y disponer lo pertinente para su conocimiento y aplicación al interior de COLPENSIONES. 15. Desarrollar y dirigir el cumplimiento de las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva, ejecutarias y rendir los informes que le sea solicitados. 16. Dirigir la ejecución presupuestal, comprometer y ordenar el gasto, suscribir los actos, y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de COLPENSIONES. 17. Nombrar y remover al personal de la Empresa que no corresponde a otra autoridad, dirigir los procesos de selección de personal, así como expedir los actos relacionados con la administración del mismo (tales como la distribución de personal, la suscripción y terminación de los contratos de trabajo, la expedición del manual de funciones y de competencias laborales y la creación o supresión de grupos internos de trabajo). La vinculación de los Vicepresidentes y los Jefes de Oficina de la Empresa deberá contar con la aprobación previa de la Junta Directiva. 18. Proponer para aprobación de la Junta Directiva, previo estudio técnico, la creación, supresión o fusión de Gerencias, Direcciones, Subdirecciones y Direcciones Regionales que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Empresa. 19. Crear, modificar o suprimir puntos de atención y corresponsales que se requiera para el cumplimiento del objeto social. 20. Recomendar a la Junta Directiva la aceptación de cesiones y subrogaciones con Empresas Públicas. 21. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el manual de contratación, con sujeción a lo previsto en la Ley. 22. Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la Ley 734 de 2002 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 23. Dirigir las políticas para el fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 24. Dirigir las políticas de control de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás actividades ilícitas, aprobadas por la Junta Directiva de Colpensiones que sean necesarias para el cumplimiento de la Empresa. 25. Rendir informes solicitados por las entidades de inspección, control y vigilancia y las demás autoridades a las cuales se les deba reportar información. 26. Las





La validez de este documento puede verificarse en la página www.supfinanciera.gov.co con el número de FID

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

demás inherentes a la naturaleza de la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos o los estatutos. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Facultar al Presidente de COLPENSIONES por única vez, para escoger y contratar de los servidores públicos que hoy ocupan cargos de Vicepresidentes y Directores de Oficina Nacional en forma permanente, que surtieron los procesos de selección propios de la Administradora y que fueron aprobados por la Junta Directiva, para ocupar los cargos de Vicepresidentes y Jefes de Oficina. (Acuerdo 106 del 01 de marzo de 2017).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Jaime Dussan Calderon Fecha de inicio del cargo: 26/01/2023	CC - 12102957	Presidente
Jorge Alberto Silva Acero Fecha de inicio del cargo: 14/12/2017	CC - 19459141	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019001331-000 del día 8 de enero de 2019, la entidad informa que con documento del 17 de diciembre de 2018 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 01-2019 del 11 de enero de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Javier Eduardo Guzmán Silva Fecha de inicio del cargo: 21/12/2018	CC - 79333752	Suplente del Presidente
Diego Alejandro Urrego Escobar Fecha de inicio del cargo: 10/02/2022	CC - 79983390	Suplente del Presidente
Oscar Eduardo Moreno Enriquez Fecha de inicio del cargo: 11/07/2019	CC - 12748173	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2020289549-000 del día 1 de diciembre de 2020, que con documento del 12 de noviembre de 2020 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 019 del 12 de noviembre de 2020. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Maria Elisa Moron Baute Fecha de inicio del cargo: 21/03/2019	CC - 40790026	Suplente del Presidente

Calle 7 No. 4 - 48 Bogotá D.C.
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.supfinanciera.gov.co

Página 3 de 4



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



PC078933219

08-02-23 PC078933219

W07MTV02PU

THOMAS GRIFFIN & SONS

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

**JOSUÉ OSWALDO BERNAL CAVEDES
SECRETARIO GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."





Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16

Facto No. 2023057044

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: R2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: TABOR ASESORES LEGALES SAS
NIT: 900442223 7 Administración : Dirección Seccional
De Impuestos De Bogotá, Régimen Común
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02106183
Fecha de matrícula: 7 de junio de 2011
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2023
Grupo NITF: Grupo III.

LA PERSONA JURÍDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL. POR TAL RAZÓN, LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN DEL AÑO: 2022.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 76 N 28 A 31
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: macamilarioso@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3006957607
Teléfono comercial 2: 3004844662
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 76 N 28 A 31
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: macamilarioso@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3006957607
Teléfono para notificación 2: 3004844662
Teléfono para notificación 3: No reportó.

Página 1 de 3



06-02-23 PC078933218

YHE73P4VJ0

THOMAS GARCIA S. GARCIA

República de Colombia

Paquet notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Folio No. 0023047044
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 02304704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 1 de junio de 2011 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2011, con el No. 01485654 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MESA&PUERTO ABOGADOS SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 010 del 5 de mayo de 2016 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2016, con el No. 02105975 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MESA&PUERTO ABOGADOS SAS a CPH INVERSIONES SAS.

Por Acta No. 14 del 16 de marzo de 2019 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2019, con el No. 02436957 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CPH INVERSIONES SAS a TABOR ASESORES LEGALES SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

La persona jurídica se disolvió y entró en estado de liquidación mediante Resolución No. 2022-01-191323 del 30 de marzo de 2022 de Superintendencia de Sociedades, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2022 con el No. 02877710 del Libro IX y por Acta No. 0014 del 30 de diciembre de 2022 de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2023 con el No.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Razón Nr. 823067044
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 82306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

02949400 del Libro IX, la persona jurídica de la referencia se reactivó.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal: Primero. La prestación de servicios jurídicos y de asistencia profesional en todas las áreas del derecho a la comunidad en general, sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras. En desarrollo de este objeto, la La Sociedad tendrá como objeto principal: Primero. La prestación de servicios jurídicos y de asistencia profesional en todas las áreas del derecho a la comunidad en general, sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras. En desarrollo de este objeto, la sociedad podrá A) ofrecer un servicio integral y especializado de asesoría, consultoría y representación en las áreas del derecho, contables, tributarias, sector inmobiliario, gestión empresarial, la asesoría integral a nivel empresarial y la representación judicial de personas jurídicas y naturales en litigios ordinarios y arbitrajes. B) Adquirir, usufructuar, gravar o limitar, representar, dar o tomar en arrendamiento a otro título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtenerlos fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa, constituir sucursales y sociedades filiales nacionales y fuera del país para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualquiera de las actividades comprendidas dentro del objeto social, C) Adquirir poseer y dar en arrendamiento o a título oneroso traslativo o no de dominio, equipos, instalaciones, máquinas, muebles u otros implementos o activos destinados a la dotación, funcionamiento y explotación de establecimientos que hagan relación con cualquier tipo de actividad lícita, D) La inversión en sociedades o empresas de cualquier naturaleza o especie de la sociedad mercantil E) Adquisición, posesión y exportación de patentes, nombres comerciales, marcas, secretos industriales, licencias u otros derechos constitutivos de propiedad industrial, conceder su exportación a terceros mediante licencia contractual o adquirir de ellos concesiones para su explotación directa o a través de otras sociedades. F) Transigir, desistir y someter a decisiones arbitrales sobre marcas, dibujos, insignias, patentes y conseguir registros de marcas, patentes y privilegios o cederlos a cualquier título. G) Adquirir como propietario o a cualquier otro título todo tipo de bienes, derechos

Página 3 de 3



PC078933217

08-02-23 PC078933217

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Recibo No. 3823067044
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 82306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

económicos o litigiosos, carteras de forma individual o de manera masiva. Enajenar toda clase de bienes o inmuebles, así como darlos o tenerlos en arrendamiento, pignorarlos o hipotecarlos según el caso. H) Adquirir o hacer toda clase de instalaciones industriales o comerciales relacionadas con el objeto social, tales como fábricas, talleres, almacenes de distribución o venta. I) Enajenar, arrendar, gravar y administrar en general los bienes que corresponden al patrimonio social. J) Contratar para sí o como cedeat, préstamos, girar, endosar, descontar, toda clase de títulos valores y celebrar en general toda clase de operaciones relacionadas con títulos de crédito, civiles o comerciales que reclamen en desarrollo de los negocios sociales. K) Aportar sus bienes, en todo o en parte, a otra u otras sociedades en que le convenga vincularse para el mejor desarrollo de su negocio. L) Intermediar como agente, accionista, representante, consultora, corredora o factor y cualquier otra forma de mandato inherente con las actividades y operaciones relacionadas con sus negocios. M) Asesorar a personas naturales y jurídicas, nacionales o del exterior, en el manejo eficiente de recursos en materia económica, financiera, administrativa y comercial. En general, la sociedad podrá llevar a cabo cualquier tipo de actividad comercial o civil lícita, tales como las contempladas dentro del artículo 20 del Código de Comercio.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	: \$200.000.000,00
No. de acciones	: 2.000,00
Valor nominal	: \$100.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	: \$1.000.000,00
No. de acciones	: 10,00
Valor nominal	: \$100.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	: \$1.000.000,00
No. de acciones	: 10,00



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Folio No. 2823067044
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : \$100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La Sociedad tendrá un Gerente y será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales por un (1) suplentes, elegidos por la Asamblea de Accionistas para periodos de un (1) año, reelegibles indefinidamente y removibles en cualquier tiempo. El Gerente será el Representante Legal de la sociedad y tendrá a su cargo la dirección y administración de los negocios sociales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo como representante legal y en especial: A. Ejecutar o hacer ejecutar las resoluciones de la asamblea general. B. Ejecutar las operaciones en que la sociedad haya de ocuparse para el cumplimiento del objeto social sujetándose a los estatutos y las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. C. Representar a la sociedad ante terceros, judicial y extrajudicialmente y autorizar con su firma los actos y contratos en que ella intervenga. D. Constituir apoderados que representen a la sociedad judicial o extrajudicialmente. E. Servir de consultor y asesor en la asamblea de accionistas en todas las actividades de la sociedad. F. Celebrar los actos y contratos que tiendan a cumplir los fines sociales sin límite de cuantía. G. Orientar de acuerdo con las decisiones de la asamblea de accionistas todas las actividades de la sociedad. H. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o cuando un número plural de acciones que represente por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito le solicite que convoque a asamblea general. I. Dentro de la delegación que le haga la asamblea de accionistas, organizar lo relativo a la administración del personal, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. J. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, las cuentas, inventarios y el balance general de cada ejercicio para su aprobación o aprobación acompañado del detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejercicio social, lo mismo que un

Página 3 de 3

República de Colombia

Plapel notarial para uso exclusivo de registros de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

PC078933216

08-02-23 PC078933216

T4RAJ99EHD

THOMAS LINDS & SONS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Recibo No. A23047044
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2304704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

proyecto de distribuciones de utilidades repartibles y los demás datos que exige la ley. R. Presentar balances y un informe sobre la marcha de los negocios con la periodicidad que le indique la asamblea de accionistas. L. Presentar a la Asamblea General de Accionistas un proyecto de apropiación de las reservas que ordenan las disposiciones legales. M. Cuidar de la recaudación de los fondos sociales. N. Informar a la Asamblea General de Accionistas sobre las operaciones de la sociedad y presentarle detalladamente los informes que esta solicite. O. Cumplir y hacer cumplir que se cumplan oportunamente todas las resoluciones de la asamblea general como los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad y p. Todas las demás funciones que señalen la ley, los estatutos o le delegue la Asamblea de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 0014 del 30 de diciembre de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2023 con el No. 02949425 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Maria Camila Rios Oliveros	C.C. No. 1026275391

Por Acta No. 13 del 18 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de marzo de 2019 con el No. 02436685 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Paola Fernanda Ayala Salamanca	C.C. No. 1151937659

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Resibo No. A833047044
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN R2306704465426

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 007 del 9 de julio de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02003197 del 16 de julio de 2015 del Libro IX
Acta No. 010 del 5 de mayo de 2016 de la Accionista Único	02105975 del 23 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 14 del 18 de marzo de 2019 de la Accionista Único	02436957 del 19 de marzo de 2019 del Libro IX
Acta No. 0014 del 30 de diciembre de 2022 de la Accionista Único	02949409 del 27 de marzo de 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6201
Actividad secundaria Código CIIU: 6910
Otras actividades Código CIIU: 6810

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño

Página 7 de 9

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de registros de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial

PC078933215

08-02-23 PC078933215

VDSSOMINZOB

THOMAS GREGG & SONS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Secreto No. 2023067044
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: R2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario PUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del PUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 13 de junio de 2011. Fecha de envío de información a Planeación : 29 de marzo de 2023. A la vez Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMMLV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16
Folio No. 823067044
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 82306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 3150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Constanza Puentes Trujillo
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

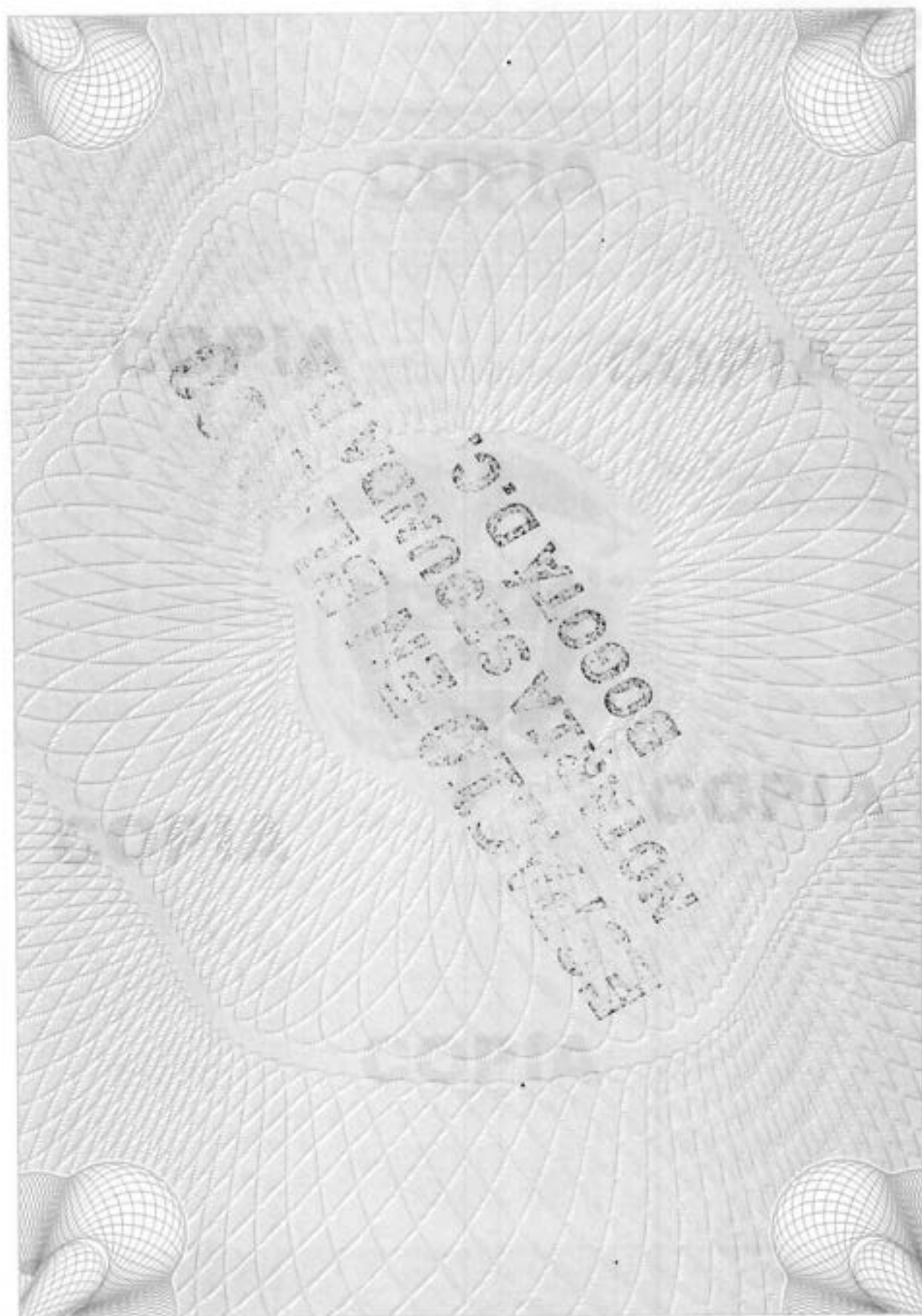


PC078933214

08-02-23 PC078933214

2LHPCUJATG

THOMAS GRIFFIN & SONS



100 EURO

100 EURO



República de Colombia

DIAN DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y AFINES		Formulario del Registro Único Tributativo		001	
2. Concepto 03 Aduanero		4. Número de formulario 14900433611			
5. Número de identificación tributaria (NIT) 0004422237		6. DV 7		12. División sectorial 3-2	
14. Fuente electrónica					
IDENTIFICACIÓN					
25. Tipo de documento 1		26. Nombre de identificación		27. Fecha expedición	
28. País		29. Departamento		30. Ciudad/municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Último nombre					
UBICACIÓN					
35. Dirección principal CL 2 NORTE 23A 31		36. Departamento Bogotá D.C.		37. Ciudad/municipio Bogotá, D.C.	
38. Correo electrónico adwon1@asesoreslegales.com		39. Teléfono 1 3000957607			
40. Teléfono 2 3004844662					
CLASIFICACIÓN					
41. Actividad principal 42. Código 0120100330		43. Actividad secundaria 44. Código 091020160505		45. Otras actividades 46. Código 0010	
47. Fecha inicio actividad		48. Fecha fin actividad		49. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
50. Responsables de Beneficiarios Finales					
51. Responsables de Beneficiarios Finales					
52. Responsables de Beneficiarios Finales					
53. Responsables de Beneficiarios Finales					
54. Responsables de Beneficiarios Finales					
55. Responsables de Beneficiarios Finales					
56. Responsables de Beneficiarios Finales					
57. Responsables de Beneficiarios Finales					
58. Responsables de Beneficiarios Finales					
59. Responsables de Beneficiarios Finales					
60. Responsables de Beneficiarios Finales					
61. Responsables de Beneficiarios Finales					
62. Responsables de Beneficiarios Finales					
63. Responsables de Beneficiarios Finales					
64. Responsables de Beneficiarios Finales					
65. Responsables de Beneficiarios Finales					
66. Responsables de Beneficiarios Finales					
67. Responsables de Beneficiarios Finales					
68. Responsables de Beneficiarios Finales					
69. Responsables de Beneficiarios Finales					
70. Responsables de Beneficiarios Finales					
71. Responsables de Beneficiarios Finales					
72. Responsables de Beneficiarios Finales					
73. Responsables de Beneficiarios Finales					
74. Responsables de Beneficiarios Finales					
75. Responsables de Beneficiarios Finales					
76. Responsables de Beneficiarios Finales					
77. Responsables de Beneficiarios Finales					
78. Responsables de Beneficiarios Finales					
79. Responsables de Beneficiarios Finales					
80. Responsables de Beneficiarios Finales					
81. Responsables de Beneficiarios Finales					
82. Responsables de Beneficiarios Finales					
83. Responsables de Beneficiarios Finales					
84. Responsables de Beneficiarios Finales					
85. Responsables de Beneficiarios Finales					
86. Responsables de Beneficiarios Finales					
87. Responsables de Beneficiarios Finales					
88. Responsables de Beneficiarios Finales					
89. Responsables de Beneficiarios Finales					
90. Responsables de Beneficiarios Finales					
91. Responsables de Beneficiarios Finales					
92. Responsables de Beneficiarios Finales					
93. Responsables de Beneficiarios Finales					
94. Responsables de Beneficiarios Finales					
95. Responsables de Beneficiarios Finales					
96. Responsables de Beneficiarios Finales					
97. Responsables de Beneficiarios Finales					
98. Responsables de Beneficiarios Finales					
99. Responsables de Beneficiarios Finales					
100. Responsables de Beneficiarios Finales					

PC078933213

08-02-23 PC078933213

GUPT08560

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14909433611



5. Número de identificación tributaria (RUT)

9 0 0 4 4 2 2 2 3 7

6. DV

12. Operación económica

Importación de Bienes

14. Fecha de inscripción

Características y forma de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades instituidas por ley o decreto de carácter nacional, departamental, municipal o distrital

65. Cooperativas

66. Sociedades y organismos extranjeros

67. Otros

1

68. Organización jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

0 1

72. Número

0 0 1 4

0 0 1 4

73. Fecha

2 0 1 1 0 6 0 1

2 0 2 2 1 2 3 0

74. Número de acta

0 3

0 3

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 1 0 6 0 7

2 0 2 3 0 3 2 7

77. Ins. Matricula mercantil

0 2 1 0 6 1 0 3

0 2 1 0 6 1 0 3

78. Departamento

1 1

1 1

79. Ciudad/Ubicación

4

4

82. Estructura

1 0 0 %

83. Nacionalidad

0 0 %

84. Nacionalidad

1 0 0 0 %

85. Extranjeros

0 %

86. Extranjeros

0 0 %

87. Extranjeros

0 0 %

Vigencia

88. Desde

2 0 1 1 0 6 0 1

89. Hasta

2 0 2 2 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

90. Entidad de vigilancia y control

Supervisores de Sociedades

5

Estado y Detalle

Núm.

89. Estado actual

90. Fecha control de estado

91. Número de identificación tributaria (RUT)

92. DV

1

0 1

2 0 1 5 0 1 0 1

2

3

4

5

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Forma del grupo societario y/o empresarial

95. Empresa de la identificación tributaria (RUT) de la Unión o Consolidada

96. DV

97. Forma y número social de la entidad o contribuyente

178. Número de identificación tributaria

179. País

172. Número de identificación tributaria

173. Número de identificación tributaria

Fecha generación del documento: PCP-02-49-2022-V-32-10-16



DIAN
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y AFINES

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Experiencia reservada para la DIAN

4. Número de formulario

14909433611



0413072072324899641001018000014909433611

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección electrónica

9 0 - 0 4 4 2 2 2 3

7

Provincia de Bogotá

3 - 2

13. Estado electrónico

Representación

8. Representación

REPRS LEGAL PRPE

1.0

9. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 2 - 1 2 3 0

9. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1.3

101. Número de identificación

1 0 2 6 2 7 5 3 9 1

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

10. Primer apellido

PEREZ

105. Segundo apellido

OLIVEROS

106. Primer nombre

LIARIN

107. Otros nombres

CAMILA

11. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

12. Representación

REPRS LEGAL SUFL

1.0

13. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 2 - 0 3 1 0

14. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1.3

101. Número de identificación

1 1 5 1 9 3 2 6 6 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

15. Primer apellido

AVILA

105. Segundo apellido

SALAMANCA

106. Primer nombre

PAOLA

107. Otros nombres

BERNARDA

16. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

17. Representación

REPRS LEGAL SUFL

1.0

18. Fecha inicio ejercicio representación

19. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1.3

101. Número de identificación

1 1 5 1 9 3 2 6 6 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

20. Primer apellido

AVILA

105. Segundo apellido

SALAMANCA

106. Primer nombre

PAOLA

107. Otros nombres

BERNARDA

21. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

22. Representación

REPRS LEGAL SUFL

1.0

23. Fecha inicio ejercicio representación

24. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1.3

101. Número de identificación

1 1 5 1 9 3 2 6 6 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

25. Primer apellido

AVILA

105. Segundo apellido

SALAMANCA

106. Primer nombre

PAOLA

107. Otros nombres

BERNARDA

26. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

27. Representación

REPRS LEGAL SUFL

1.0

28. Fecha inicio ejercicio representación

29. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1.3

101. Número de identificación

1 1 5 1 9 3 2 6 6 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

30. Primer apellido

AVILA

105. Segundo apellido

SALAMANCA

106. Primer nombre

PAOLA

107. Otros nombres

BERNARDA

31. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Fecha generación documento PCP: 02-05-2023 09:33:16.3

PC078933212

08-02-23 PC078933212

OBXUEMPAC

THOMAS GARCIA & ASOCIADOS

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900433611



14151770723246944000200 0000014009433611

5. Número de Identificación Tributaria (RIT)

6. DV

12. Dirección personal
Inmueble en Bogotá

11. Cédula electrónica

0 0 0 4 4 2 2 2 3 7

0 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (RIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de constitución			
Contador principal	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (RIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de constitución			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 1 1 1 0 - 7 1		2 1 3 4 3 4 7
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ALVAREZ	REYES	MARITZA	ANTONIO
156. Número de Identificación Tributaria (RIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de constitución	2 0 2 3 0 4 0 1			

República de Colombia

5

ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

DE FECHA:

DIECISIETE (17) DE MAYO

DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), OTORGADA EN LA NOTARÍA SEGUNDA

(2a.) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR

C.C.No. 79983390

TEL o CEL. 3004919939

DIR. Carrera 15 # 170-81

CIUDAD: Bogotá

E-MAIL. dalegre@colpensiones.gov.co

PROFESIÓN U OFICIO: Abogado

OBRA en su condición de Representante Legal Suplente de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7

DANIEL JOSE MARTINEZ MARIÑO

NOTARIO SEGUNDO (2º) ENCARGADO DE BOGOTÁ, D.C.

Esta notaría para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el notario

PB
RAD1244

N2

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Leovedis Elías Martínez Durán
Notario



HACE CONSTAR

QUE EL PODER CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA 1186 DE FECHA DIECISIETE (17) DE MAYO DEL AÑO 2023 CUYA PRESENTE COPIA ES FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE PROTOCOLO.

QUE A LA FECHA SE PRESUME VIGENTE CON LAS FACULTADES A EL INHERENTES, POR CUANTO EN EL ORIGINAL DEL INSTRUMENTO CITADO, NO FIGURA NOTA ALGUNA DE REVOCATORIA, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN O ACLARACIÓN, NI LIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES Y EN GENERAL NINGUNA SITUACIÓN QUE LA AFECTE EN ALGÚN SENTIDO

ES LA COPIA NÚMERO DOS (02) EXPEDIDA EN CATORCE (05) HOJAS ÚTILES CON DESTINO AL INTERESADO.

DADA EN BOGOTÁ D.C. EL DÍA DIECINUEVE (19) DE MAYO DEL AÑO 2023.



DIEGO ARMANDO PARDO FIGUEROA
NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
(ENCARGADO)

NOTA. Cualquier cambio o modificación que se realice sobre estas copias sin la autorización e intervención del notario conforme a la ley es ilegal y utilizarlas puede causar sanción penal.

Carrera 13 No. 64-29
www.notaria2bogota.com
PBX 3000861



PC078933210

08-02-23 PC078933210

7EF9XL2PT5

THOMAS LINDS & LINDS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.733.703**

TORRES ALDANA

APELLIDOS

DIANA LEONOR

NOMBRES



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Diana Leonor Torres Aldana', is written over a horizontal line on the left side of the card.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

17-MAY-1990

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

O-

G.S. RH

F

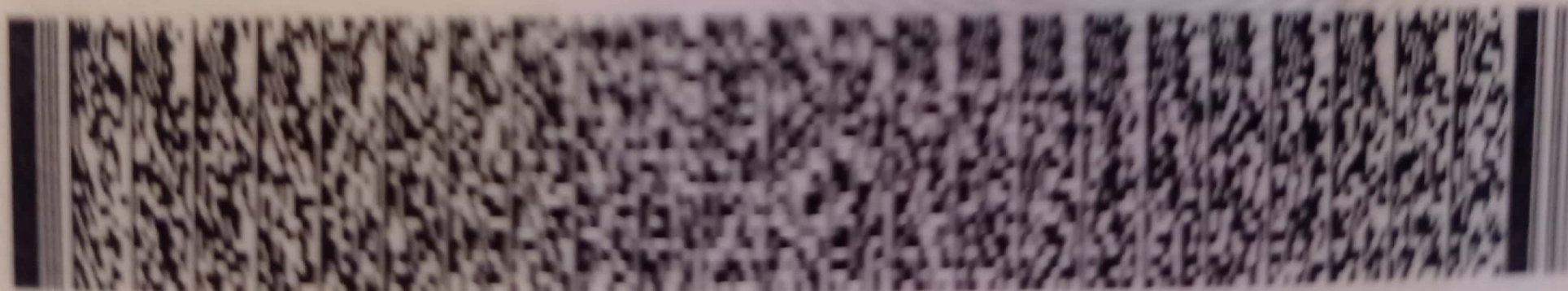
SEXO

24-OCT-2008 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1509400-00164174-F-1069733703-20090725

0013868625A 1

26000204



Consejo Superior
de la Judicatura

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



NOMBRES:
DIANA LEONOR

APELLIDOS:
TORRES ALDANA

PRESIDENTE CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

UNIVERSIDAD
INCCA DE COLOMBIA

FECHA DE GRADO
25 oct 2013

CONSEJO SECCIONAL
CUNDINAMARCA

CEDULA
1.069.733.703

FECHA DE EXPEDICION
12 nov 2013

TARJETA N°
235865

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.**